HEINRICH BÖLL STIFTUNG

perspectivas

ANÁLISIS Y COMENTARIOS POLÍTICOS

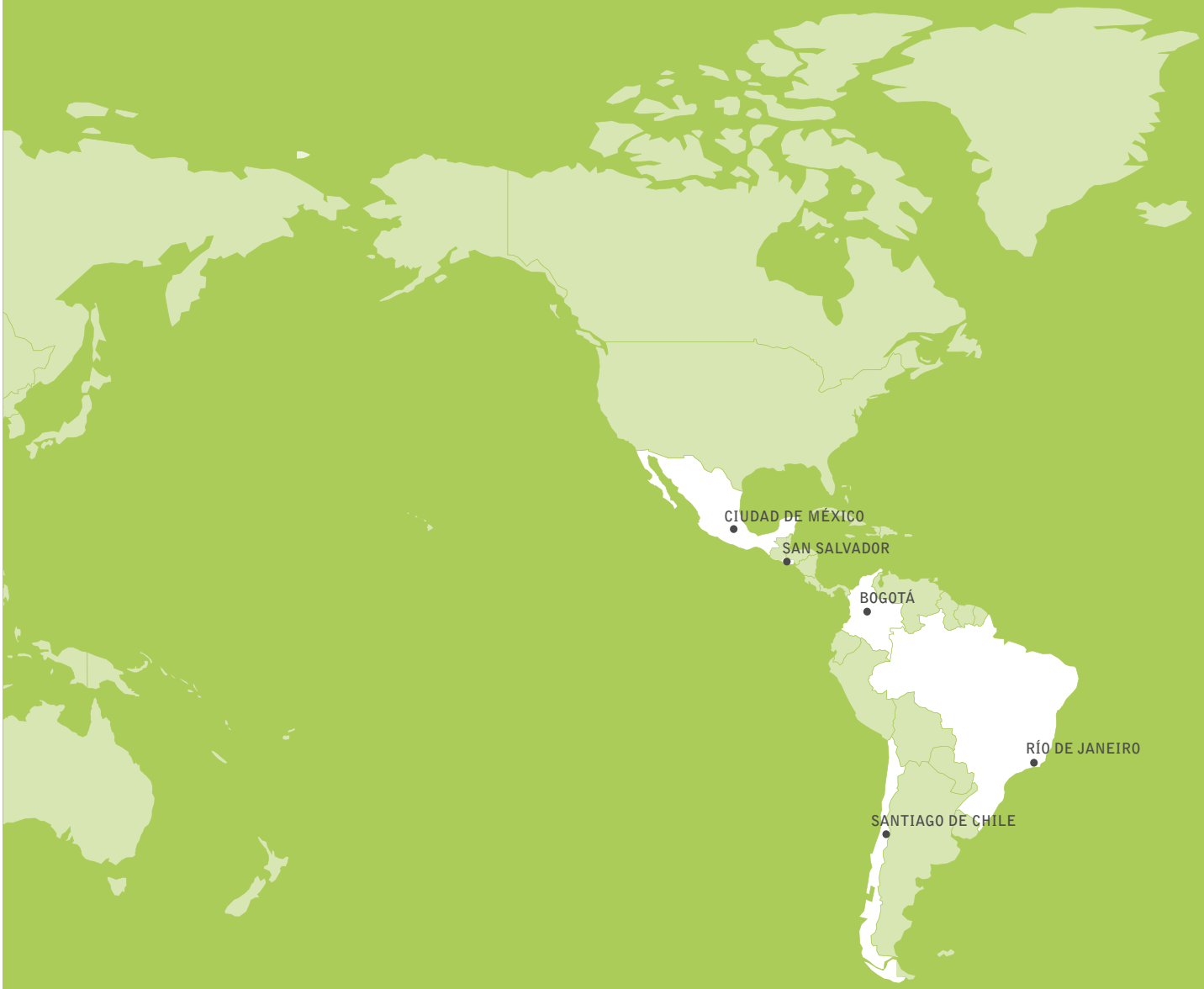
Número 6
Noviembre 2020

AMÉRICA LATINA

Mentiras, odio y desinformación

Tiempos postfácticos en América Latina

Perspectivas América Latina se publica en estrecha cooperación con las oficinas de la Fundación Heinrich Böll en América Latina.



Heinrich-Böll-Stiftung

La Fundación Heinrich Böll es una fundación política alemana cercana al partido Alianza 90/Los Verdes. Tiene su sede central en Berlín y cuenta actualmente con 34 oficinas repartidas por todo el mundo. En América Latina la fundación se siente especialmente comprometida, junto con muchas organizaciones contrapartes, con la política climática, la promoción de la democracia y la justicia de género así como el cumplimiento de los derechos humanos. Para nosotros es muy importante fortalecer y apoyar organizaciones locales de la sociedad civil. Concentramos nuestros esfuerzos en la transmisión de conocimientos y la comprensión entre los y las actoras en Europa y América Latina, para lo cual promovemos también el diálogo internacional, ya que lo consideramos esencial para la acción política constructiva.

Imagen de portada: La Loma

Índice

2 **Prólogo**

5 **Convencidos de su propia verdad. Tiempos postfácticos en América Latina**
Beatriz Busaniche

9 **Odio, discriminación y desinformación en el debate sobre migración en México**
Martha A. Tudón Maldonado

13 **Negacionistas en el poder: crisis de confianza y colapso medioambiental en Brasil**
Tatiana Roque

19 **Cuando el silencio también habla: medios de comunicación y minorización de la violencia contra las mujeres en El Salvador**
Laura Aguirre

23 ***Fake News:* desinformación y censura en Colombia**
Diana Salinas

29 **Combatiendo las mentiras: Verificado, la iniciativa mexicana de chequeo de datos**
Entrevista con Daniela Mendoza

33 **Tecnologías y COVID-19 en Brasil: entre la desinformación y la vigilancia**
Jamila Venturini y Joyce Souza

Prólogo

La desinformación, como las *Fake News*, no son un fenómeno nuevo. Desde siempre ha existido la tentación de diseminar noticias deliberadamente falsas para influir la opinión pública. Los nuevos medios han contribuido, además, a que esta difusión ocurra de manera más rápida, más amplia y, sobre todo, más dirigida, con lo que nos han catapultado a la era postfáctica. Un ejemplo actual de esto es la crisis desatada por el COVID-19, la cual ha dado origen a una ola de teorías conspirativas, instrumentalizadas de manera creciente por fuerzas de extrema derecha.

Cada vez es más frecuente que sea la confianza en la fuente de información y no la veracidad del contenido de esta información lo que se convierte en factor decisivo. En el mundo entero somos testigos de cómo la ciencia, las instituciones, los medios tradicionales, los partidos y los sistemas políticos han perdido esta confianza varias veces. La creciente desconfianza hace que las personas se vuelvan susceptibles a creer en información proveniente de otras fuentes, cuya credibilidad se sustenta en el mero hecho de que divergen de las fuentes de información establecidas. Esta desconfianza se refuerza a través de algoritmos y bots que contribuyen a que estas explicaciones alternativas aparezcan de modo muy frecuente, creando una confirmación aparente. Esto, sin embargo, generalmente no sucede de modo aleatorio, sino que suele ser parte de una estrategia de desinformación bien planeada, dirigida a generar polarización. La oferta de mensajes claros y simples, así como la promesa de que todo permanecerá como antes, son aceptadas con gusto por muchas personas, que a su vez comparten la información. La pérdida de confianza se convierte así en causa y efecto de la desinformación y lleva, en última instancia, a la desestabilización de los sistemas democráticos.

En América Latina, políticos como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador ganaron las elecciones presidenciales gracias, sobre todo, a su distanciamiento del establishment político, soslayando que también ellos forman parte desde hace mucho tiempo de la clase política que tanto desacreditan. Una vez en el poder, han intentado con todos los medios posibles mantener su imagen anti-establishment, entre los cuales se incluyen las campañas dirigidas de desinformación. A través de teorías de la conspiración, *Fake News*, propaganda, campañas de odio o incluso actos de censura, han construido imágenes del «enemigo» y consolidado su propia base a través de un proceso de separación y exclusión de «los otros». Polarizando y dividiendo a la sociedad, y resquebrajando la confianza en las instituciones estatales aseguran su poder.

Sin embargo, no sólo la política se sirve de las estrategias de desinformación. Otros grupos de interés, como, por ejemplo, las y los que provienen del espectro del fundamentalismo religioso, las y los clima-negacionistas así como individuos sexistas, homofóbicos y racistas, explotan estos mecanismos. El silencio también puede ser un medio de desinformación, ya que contribuye a la normalización de la injusticia en la sociedad, como en el caso de la violencia contra las mujeres.

En los artículos de este número de *Perspectivas* —que en esta sexta edición resultaron provenir exclusivamente de mujeres— las autoras latinoamericanas analizan cómo funcionan dichos mecanismos en América Latina y nos muestran alternativas. Desde diversos ángulos indagan sobre la desinformación, la falta de transparencia, la retención deliberada de información y el negacionismo científico.

En su contribución, Beatriz Busaniche examina las campañas dirigidas de desinformación que han llevado al resurgimiento de los partidos de derecha en América Latina, cuyo éxito es el resultado de una sinergia entre dichas campañas y tendencias conservadoras presentes con anterioridad en la sociedad. A través de ejemplos provenientes de varios países, Busaniche muestra cómo diversas herramientas de comunicación desarrolladas ex profeso se utilizan para exacerbar los miedos, las inseguridades y los códigos de valores de las personas, de modo que se configuren nuevas narrativas de derecha y se influya en las posiciones y el comportamiento de la población.

En el debate sobre migración, la desinformación, la agitación, las expresiones racistas y discriminatorias también se han convertido en

instrumentos de polarización, tal como muestra Martha A. Tudón a través de un estudio de caso ubicado en la frontera sur de México. Como señala la autora, en la mayoría de los casos es difícil determinar con exactitud los orígenes y motivos de esta desinformación, difundida principalmente a través de las redes sociales. Sin embargo, Tudón sostiene que las autoridades estatales comparten la responsabilidad de las consecuencias que trae consigo la desinformación, las cuales van desde la discriminación hasta la violencia abierta. Tudón atribuye el silencio y las evasivas de las autoridades a una estrategia para respaldar ciertas decisiones, como el endurecimiento de los controles migratorios. Ante este panorama, exige al Estado adoptar medidas decisivas en contra de la discriminación, la violencia y el odio.

Tatiana Roque, por su parte, discute la pérdida de confianza en las instituciones y en la ciencia en Brasil. El ascenso de la extrema derecha ha llevado, en particular, a la minimización y al negacionismo del conocimiento científico, lo cual, en tiempos de pandemia y del inminente colapso climático, tiene graves consecuencias. El gobierno, por ejemplo, se dedica a desacreditar a las ONG y sus demandas de protección ambiental alegando que estas organizaciones están impulsadas por intereses extranjeros y vulneran los intereses nacionales. Se engaña a la gente con informaciones falsas y, de este modo, se le incita a deslegitimar instituciones como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente. Con el fin de neutralizar el negacionismo, Roque propone fortalecer el diálogo con aquellos que hasta ahora han estado excluidos del debate público, para fomentar un intercambio social más intenso.

Laura Aguirre de El Salvador indaga sobre la minimización de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Estos casi nunca informan sobre la violencia de género o cuando se refieren a ella, lo hacen de modo impreciso y sin perspectiva de género. Aguirre sostiene que relegar y callar frente al tema de la violencia contra las mujeres es un modo de desinformación. Al relegar, silenciar y presentar como «irrelevante» un problema que atañe a toda la sociedad, se vuelven a validar los roles de género sustentados en la desigualdad y se legitima la violencia contra la mujer. La autora también da cuenta de cómo numerosos nuevos medios digitales feministas en El Salvador luchan con valentía para romper el silencio en torno a la violencia de género y lograr un cambio social.

La entrevista con Daniela Mendoza gira en torno a Verificado, una iniciativa mexicana de verificación de datos, especializada en la comprobación de la información contenida en el discurso público. Dado el aumento de la desinformación en México y en el mundo, Mendoza exhorta, entre otras cosas, a fortalecer la competencia mediática de la población. La autora manifiesta su esperanza de que la pandemia del COVID-19 resulte ser un acontecimiento clave para crear una conciencia más crítica entre las ciudadanas y los ciudadanos.

Diana Salinas describe en su artículo cómo en 2016 la desinformación se convirtió por vez primera en un factor decisivo en la disputa política, y cómo contribuyó a la victoria del «No» en el plebiscito sobre los Acuerdos de Paz en Colombia. Critica el hecho de que, desde entonces, los medios sociales juegan un papel muy importante en el moldeo de opiniones y de cómo la desinformación ha adquirido una enorme influencia en las decisiones en torno al poder que toma la ciudadanía. Para contrarrestar esta situación, varios medios independientes están abocados a verificar los discursos de la clase política y de personalidades influyentes. La búsqueda por la verdad ha desatado una lucha encarnizada alrededor de la libertad de prensa, a la que el gobierno de Iván Duque ha respondido con actos velados de censura.

Jamila Venturini y Joyce Souza abordan en su artículo sobre COVID-19 la falta de transparencia y la vigilancia «invisible» en Brasil. Critican el hecho de que las tecnologías utilizadas para combatir el COVID-19 dependen del uso de datos personales, pero sin que haya transparencia acerca de cómo, cuándo y bajo qué condiciones se utilizan. Las autoras exhortan a la creación de un comité de comunicación que, con base en datos científicos, informe a la población sobre la gravedad de la pandemia. Dicho comité y las empresas responsables de la vigilancia y el control deben comprometerse a cumplir el marco legal existente sobre el acceso a la información y la transparencia, así como sobre el manejo de los datos una vez superada la pandemia.

Les deseamos una lectura enriquecedora.

Berlín, noviembre de 2020

Ingrid Spiller
Jefa de la División América Latina de la Fundación Heinrich Böll

Evelyn Hartig
Coordinadora de Programas, División América Latina de la Fundación Heinrich Böll

Convencidos de su propia verdad. Tiempos postfácticos en América Latina

Beatriz Busaniche

Cuando Jair Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil en 2019, los movimientos progresistas de América Latina quedaron estupefactos. No fue un hecho aislado. El triunfo de Mauricio Macri en Argentina en 2015, Alejandro Lacalle Pou en Uruguay, Lenin Moreno en Ecuador, Sebastián Piñera en Chile y el golpe de Estado en Bolivia constituyen tendencias que no pueden analizarse aisladas.

Aunque es difícil igualar los procesos políticos que dieron lugar a estos triunfos electorales, el resurgimiento de los partidos de derecha a los que están vinculadas estas personalidades políticas y su éxito electoral son producto de una sinergia entre tendencias conservadoras preexistentes en la sociedad y campañas de desinformación, que han reforzado la construcción de la posverdad. Estas campañas están basadas en la construcción de una esfera pública mediada por redes sociales, así como por actores pertenecientes a las nuevas iglesias evangélicas y por movimientos con bases abiertamente anticientíficas.

Posverdad y desinformación: ¿qué nos llevan a creer?

La posverdad no es una negación de la realidad, sino la creencia de que la postura propia es la verdadera, más allá de cualquier evidencia que demuestre lo contrario. La posverdad no es producida por un hecho puntual o por una noticia falsa, sino por un proceso largo de construcción de sentidos. Por eso, más que hablar meramente de noticias falsas hablamos de *procesos de desinformación*, que abonan la construcción de la posverdad. Estos procesos se sostienen en un *razonamiento motivado*, en el que la evidencia no modifica lo que creemos, sino que aquello en lo que creemos nos orienta en la selección de evidencias.[1]

Un ejemplo que muestra cómo opera el proceso de desinformación es la construcción de imaginarios sobre temas como los derechos de las mujeres o la educación sexual integral. Jair Bolsonaro basó buena parte de la penetración de su campaña en un discurso homofóbico, antifeminista y lleno de acusaciones sobre la destrucción de la familia para ganarse a un electorado que ya desde antes tenía ideas tradicionalistas, mediadas por su pertenencia a sectores religiosos ultraconservadores de larga trayectoria y penetración masiva en Brasil. Su anclaje territorial, la utilización de los medios de comunicación, y el uso intensivo de las redes sociales y servicios como WhatsApp contribuyeron a cimentar la influencia de Bolsonaro.

Guadalupe Nogués ahonda en la explicación del fenómeno de construcción de la posverdad a partir de la exploración de tres ejemplos clave: las teorías conspirativas, las diferentes formas de negacionismo y el relativismo posmoderno.

Las teorías conspirativas se sostienen en la idea de que existen grupos poderosos que ocultan verdades o imponen mentiras para su propio beneficio. En Argentina, por ejemplo, la discusión sobre la interrupción legal del embarazo y los derechos de las mujeres fue azotada con un sin fin de bulos,[2] que circularon por WhatsApp, YouTube e incluso por televisión. El espectro abarcó desde elucubraciones alrededor de las fuentes de financiamiento de las organizaciones feministas, supuestos intereses de los laboratorios internacionales y otros negocios turbios,[3] hasta una gran conspiración para destruir la institución de la familia, con feministas y comunidades LGBTI a la cabeza. No en vano, estos últimos grupos son las comunidades a las que

Beatriz Busaniche, Argentina, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Maestra en Propiedad Intelectual y candidata al doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es docente en la Universidad de Buenos Aires, en FLACSO y en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Desde 2003, es miembro de la Fundación Vía Libre, organización civil sin fines de lucro, que trabaja en la intersección de derechos fundamentales y tecnologías de información y comunicación.

apuntan directamente los militantes de la derecha más conservadora.

El negacionismo es otro ejemplo de posverdad. Sus formas van desde la negación de hechos históricos, como la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), donde un sector de la derecha insiste en minimizar el número de detenidos desaparecidos, hasta cuestiones que impactan en políticas de salud y medioambiente, como el negacionismo de la crisis climática o del VIH/Sida.[4] El caso de Bolsonaro en Brasil y su interpretación de la enfermedad producida por el virus de la COVID-19 como «una gripecita» son muestra elocuente de que el negacionismo puede provocar catástrofes humanitarias de grandes proporciones.[5]

El tercer mecanismo se refiere al *relativismo posmoderno*. Este consiste fundamentalmente en la percepción de que la realidad es una construcción social y de que la verdad es la que cada uno arma en función de su punto de vista, sus percepciones y sus sentimientos.[6] Este discurso encaja perfectamente en la filosofía del «individualismo *new age*» sobre la que trabaja el imaginario cultural del macrismo en Argentina. Según esta filosofía, el emprendimiento, el entusiasmo y el esfuerzo individual son la base del éxito en una sociedad capitalista y meritocrática, en la que, gracias a la eliminación paulatina del pensamiento crítico, el Estado se puede deslindar de toda responsabilidad colectiva y social.[7]

> El sentido común suele ser conservador y, por lo tanto, trabajar sobre su trama de creencias resulta efectivo para enfrentar el ideario progresista, que respalda la integración de minorías y la ampliación de derechos.

La política latinoamericana en tiempos de posverdad

Los partidos de derecha en América Latina hicieron una muy buena lectura de los tiempos que corren. Asesorados por expertos en comunicación de nivel internacional[8] entendieron que apelar a las tendencias conservadoras preexistentes en la sociedad era una carta ganadora en términos electorales. En las campañas de desinformación, los medios sociales operan como vectores del cambio cultural necesario para que estos movimientos pro-derecha prosperen. Las redes generadas por los medios sociales nos acercan a grupos identitarios, ponen en pie de igualdad la palabra de personas formadas y académicos con la de *influencers* y famosos, que ganan visibilidad liderando causas desde posiciones conservadoras.[9]

La eficacia de estos medios sociales radica en las posibilidades específicas que ofrecen: buena parte de lo que llega en términos de información mediante estas redes proviene de grupos de afinidad en los que las personas confían. La exposición permanente de la vida privada de las personas contribuye a la segmentación social e identitaria. Esta segmentación ha sido muy bien explotada por movimientos políticos para desarrollar herramientas de comunicación, basadas en aspectos de la órbita íntima de los usuarios, con el fin de ejercer influencia sobre sus miedos, incertezas y valores.

Es preocupante que los mecanismos que apelan a sentimientos como el miedo al otro, la ira o la incertidumbre se utilicen para alimentar una polarización extrema, en la que los líderes populistas cosechan a sus seguidores más fanáticos. Un sector de la ciudadanía elige votar a estos líderes, justamente debido a sus posturas anticientíficas, negacionistas o reivindicatorias de teorías conspirativas. Los líderes populistas promueven la idea falsa de que alguien puede efectivamente *tomar el control*. De ahí deriva su vocación de mostrarse poderosos como individuos (Bolsonaro y Trump fungen como gran ejemplo), y soslayan la reivindicación de los aspectos colectivos de la política.

El sociólogo argentino Saúl Feldman,[10] en su análisis sobre el ascenso del macrismo al poder en Argentina (2015-2019), realizó un amplio estudio sobre la construcción meticulosa de un cambio cultural que llevó a Macri al poder. Feldman analiza el concepto del *sentido común* y lo caracteriza para entender el fenómeno comunicacional de los populismos de derecha. Según su análisis, para elaborar sus estrategias comunicacionales, estos grupos parten de ideas extendidas en la sociedad, que deben ser simples, marcar causalidad transparente y responsabilidades identificables, como por ejemplo: «los pobres son vagos»;[11] ideas que permitan adscribirse a ellas de manera irreflexiva, que inhiban la discusión porque son cuestiones «naturales» y conocidas, como: «los niños visten de celeste, las niñas de rosa»;[12] así como ideas que apelen a varias generaciones y sean eficaces para explicar acciones potentes: «la economía de un país es como la de una casa, no se puede gastar más de lo que se produce». [13]

Una vez establecida la trama de creencias extendidas conformada por el *sentido común*, se trabaja políticamente sobre ella. Aquí subyace el terreno del cambio cultural requerido para cam-

biar la política: el *sentido común* suele ser conservador y, por lo tanto, trabajar sobre su trama de creencias resulta efectivo para enfrentar el ideario progresista, que respalda la integración de minorías y la ampliación de derechos. En América Latina, este ideario conservador atacó especialmente la gestión de quienes implementaron políticas exitosas para sacar a miles de personas de la pobreza, como Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia.

La política de la posverdad bien podría denominarse, como expresa Feldman, la «política del cinismo», a la que varios liderazgos de derecha son afines. Cuando rige esta política se quiebra, en primer lugar, el contrato de sinceridad entre los sectores de la política y la ciudadanía: la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015 se caracterizó, por ejemplo, por ofrecer una serie de promesas que nunca estuvieron en sus planes y que, obviamente, jamás cumplió.[14] Bajo la política del cinismo se genera así un espacio de perversión del sentido y se explota todo aquello que permita llevar agua al molino propio, sin asumir ninguna responsabilidad ni considerar las consecuencias.

Otra característica del discurso cínico es la impunidad, la cual se sustenta en la supuesta superioridad de quien lo emite (empresarios exitosos como Macri, Trump o Piñera son ejemplos). El enunciador cínico sabe que cuenta con la anuencia de quien lo legitima, sea este el poder económico, judicial, religioso, mediático o político e, incluso, una base sustantiva de seguidores. El líder político puede imponerse a la evidencia, tergiversar cualquier hecho y hacer declaraciones de absoluta crueldad.[15]

Cada una de estas acciones irá acompañada de un multiplicador de las ideas que sustentan estas acciones en redes sociales, grupos de WhatsApp y en medios de comunicación, para construir el imaginario colectivo de que «eso es lo que piensa *la gente*», el cual legitima ideas y expresiones cada vez más extremas.

Posverdad y futuro

El cambio cultural sobre el que opera la construcción de poder basada en la posverdad forma parte de una situación dinámica y paradójica. A medida que los medios sociales de comunicación evolucionan y nos acercan, nos exponen cada vez más a la creación de guetos comunicacionales y burbujas que contribuyen a la creación de sentidos particulares. La política se monta entonces sobre esta posibilidad de invisibilizar los hechos construyendo realidades paralelas, apoyadas en sistemas ideológicos y culturales conservadores.

El macrismo en Argentina es un caso paradigmático. Su estrategia comunicacional se centró en el fortalecimiento de los aspectos del sentido común más conservadores para no solo naturalizar y establecer un modelo económico regresivo en la distribución de la riqueza, sino y, muy enfáticamente, para lograr que la sociedad aceptara este modelo como inexorable. De modo paralelo, naturalizó una matriz cultural que devastó los principios básicos de la confianza institucional, arrasó con proyectos sociales, y estableció el paradigma de que la pobreza y la miseria es responsabilidad exclusivamente individual.[16]

Bajo esta lógica, los partidos de derecha, como explica Feldman, han elaborado una cosmovisión nueva anclada en el individualismo a ultranza, donde los prejuicios, los miedos y los odios encuentran terreno para florecer, y sirven de insumo para la cosecha de votos y para disciplinar a vastos sectores del tejido social.

La construcción de un futuro que supere estas tendencias es, sin dudas, el mayor desafío de los movimientos progresistas en América Latina.

---

1 Nogués, Guadalupe (2018): *Pensar con otros. Una guía de supervivencia en tiempos de posverdad,* El Gato y La Caja, Buenos Aires.

2 'Bulos' se refiere a noticias falsas distribuidas en internet con un objetivo especifico [NdR].

3 Siempre que se habla de fuentes de financiamiento en este campo aparecen figuras como el magnate George Soros así como teorías sobre un nuevo orden mundial. En cuanto a los intereses de los grandes laboratorios, éstos también han sido varias veces nombrados en las teorías conspirativas alrededor del virus de la COVID-19. En torno a los «negocios turbios», circularon algunos bulos que incluso alegaban que los restos producidos en abortos se utilizaban para la fabricación de productos cosméticos, así como un largo etcétera plagado de imágenes de horror. Véase: López, Eulogio: «Objetivos del nuevo orden mundial: gobierno global, religión global, tiranía global», Hispanidad, 8 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.hispanidad.com/confidencial/objetivos-orden-mundial-gobierno-religion-tirania-global_12016095_102.html (Consultado: 19 de Junio de 2020).

4 Se ha llegado incluso a poner en duda a instituciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, reconocidas internacionalmente por su trabajo en la búsqueda de los bebés nacidos en los centros clandestinos de detención. Véase: Rivas, Federico: «Mauricio Macri reactiva la polémica por el número de desaparecidos en Argentina», El País, 11 de agosto de 2016. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2016/08/11/argentina/1470936255_170858.html

5 Véase Reporte de Agencia EFE de Marzo 2020 https://www.youtube.com/watch?v=oYcPp1ZFETA (Consultado: 19 de Junio de 2020)

6 Esta filosofía de vida centrada en el bienestar individual y el deslinde de la responsabilidad del Estado se nutren de la filosofía New Age, consolidada desde la segunda mitad del siglo XX. Esta filosofía postula una nueva era de paz, bienestar y armonía mundial, así como cultos basados en la propia experiencia individual y el relativismo filosófico. Muchas de las

tendencias anticientíficas e individualistas contemporáneas se anclan en estas ideas, que han permeado en la sociedad como aparentemente «inocuas» por su revalorización del bienestar, la vida saludable y el contacto con la naturaleza.

[7] El filósofo Alejandro Rozitchner fue uno de los asesores principales de Mauricio Macri en su paso por la gestión pública. En este video condensa sus ideas sobre por qué se debe eliminar el pensamiento crítico de las instituciones educativas: https://www.youtube.com/watch?v=Fb2Iq4SbHZQ (Consultado: 19 de Junio de 2020).

[8] Si bien no se ha terminado de confirmar, hay testimonios que vinculan a Cambridge Analityca con una campaña para socavar la figura de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, sostenida por el partido de su sucesor, Mauricio Macri. Véase: Alconada, Hugo: «Cambridge Analytica hizo trabajos para el Pro antes de la campaña de 2015», La Nación, 20 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/cambridge-analytica-hizo-trabajos-pro-antes-campana-nid2289827 (Consultado: 19 de Junio de 2020).

[9] En Argentina, figuras como la exmodelo Amalia Granata ganaron visibilidad a partir de sus pronunciamientos contra los derechos de salud reproductiva de las mujeres, lo que la convirtió en una abanderada de las causas conservadoras. Granata encabezó una lista de diputados en la provincia de Santa Fe y ganó varias bancas en el legislativo de esa provincia para ella y otros miembros de su coalición, con una base social proveniente de las iglesias evangélicas. Véase: https://www.clarin.com/politica/amalia-granata-electa-diputada-provincial-santa-fe_0_JJFz5UCJ_.html (Consultado: 19 de Junio de 2020).

[10] Feldman, Saúl (2019): La conquista del sentido común. Cómo planificó el macrismo el «cambio cultural», Continente, Buenos Aires.

[11] Trombetta, Martín: «El mito de los pobres vagos», Los pasos de Aquiles. Disponible en: https://lospasos-deaquiles.ungs.edu.ar/el-mito-de-los-pobres-vagos/ (Consultado: 11 de abril de 2020).

[12] Damares Alves, Ministra de Familia y Derechos Humanos de Brasil, en abierta confrontación con los derechos de las comunidades LGBTI y contra lo que denomina la «ideología de género». Véase: «Fiel defensora del patriarcado», Página 12, 19 de abril de 2019. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/188305-fiel-defensora-del-patriarcado (Consultado: 10 de abril de 2020).

[13] Scaletta, Claudio: «La pregunta de Virginia Gallardo a Kicillof y su uso mediático», Página 12, 21 de julio de 2019. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/207298-la-pregunta-de-virginia-gallardo-a-kicillof-y-su-uso-mediati (Consultado: 10 de abril de 2020).

[14] Entre estas promesas no cumplidas figuran la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, el compromiso de bajar la inflación e impedir la devaluación de la moneda nacional. Aunque es posible que la coyuntura económica tuviera injerencia en el incumplimiento de algunas de estas promesas, nunca estuvo en los planes del gobierno cumplir con ellas. Véase: «Promesas de Macri chequeadas», Chequeado. Disponible en: https://chequeado.com/promesas/ (Consultado: 10 de abril de 2020).

[15] Por ejemplo: «El error de la dictadura fue torturar y no matar». Para más expresiones violentas y crueles de Bolsonaro, véase: «El top 20 de las frases más polémicas de Jair Bolsonaro», Internacional, Perfil, 28 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/internacional/frases-mas-polemicas-de-jair-bolsonaro.phtml (Consultado: 9 de Junio de 2020).

[16] Schteingart, Daniel: «No somos un país de mierda. Datos contra el sentido común.», Revista Anfibia. Disponible en: http://revistaanfibia.com/ensayo/no-somos-pais-de-mierda/ (Consultado: 9 de Junio de 2020).

Odio, discriminación y desinformación en el debate sobre migración en México

Martha A. Tudón Maldonado

Tapachula, ubicada en el estado mexicano de Chiapas, en la frontera con Guatemala, es una población inmersa en una dinámica de flujo migratorio de personas que ingresan a México con la intención de llegar a Estados Unidos. En un contexto de múltiples caravanas migrantes, y tras severas presiones del gobierno estadounidense, las autoridades mexicanas decidieron, en junio de 2019, implementar una política de contención y disuasión migratoria a través del Plan de Migración y Desarrollo.[1] Dicha política ha implicado varias medidas de seguridad, entre ellas, la militarización de la frontera sur de México, el nombramiento de miembros de las fuerzas armadas como delegados del Instituto Nacional de Migración (INM), así como el aumento de retenes, redadas y controles.[2] Como resultado, de junio a noviembre de 2019, fueron detenidas 278,995 personas migrantes,[3] muchas de las cuales se concentran en Tapachula.[4]

Retener a la población migrante en México e impedir su tránsito hacia Estados Unidos, mientras las personas aclaran su estatus migratorio, ha propiciado la polarización de opiniones en la sociedad mexicana. Incluso, desde ARTICLE 19 hemos notado —a través de nuestro trabajo como organización internacional de derechos humanos— que existe una tendencia entre actores no identificados a crear y difundir desinformación,[5] discursos ofensivos,[6] discriminatorios[7] y de odio[8] a través de las plataformas de las redes sociales.

Las motivaciones para difundir estas expresiones podrían ser múltiples, tales como expresar puntos de vista de personas particulares, obtener apoyo a ideologías o propuestas políticas específicas, afectar de una u otra manera la opinión pública o, simplemente, generar provocaciones en la sociedad. Si bien sería difícil conocer a ciencia cierta los motivos de estas expresiones, lo que sí sabemos es que algunas de sus modalidades tienen el potencial de confundir a la población e, incluso, instigar a la violencia o a la discriminación hacia grupos identificables de la sociedad,[9] como es el caso de la población migrante.

Caso de estudio: la frontera sur de México

En Tapachula, los prejuicios y estereotipos entran en juego al momento de generar narrativas en torno a las personas migrantes y al proceso mismo de la migración. Por ejemplo, y según lo compartido por un periodista de Chiapas,[10] en Tapachula, los medios de comunicación han retomado la suposición estigmatizante y racista de que la mayoría de las personas de África son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (*VIH*) y que, además, son «hipersexuales». Este periodista incluso señaló que ha escuchado a las autoridades locales afirmar que los servicios de salud seguramente se encarecerán porque deben vigilar que las enfermedades de transmisión sexual que supuestamente tienen las y los migrantes no sean «contagiadas» a otras personas. Asimismo escuchó a las autoridades responsabilizar a los migrantes por eventuales fallas o privaciones en la atención médica dirigida a la población mexicana. Esto alimenta la idea de que los recursos estatales no sólo son escasos, sino que se utilizan en gran medida para atender a las extranajeras y los extranjeros.

Esta narrativa, además de estar presente en los medios de comunicación tradicionales, también se comparte a través de las redes sociales, principalmente WhatsApp y Facebook,[11] aumentando el estigma, el rechazo y el resentimiento hacia las y los migrantes de

Martha A. Tudón M., México, es defensora de derechos humanos y especialista en construcción de políticas públicas. Actualmente funge como Coordinadora de Derechos Digitales en la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE19, donde desarrolla investigaciones y procesos de incidencia en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en el entorno digital.

ARTICLE 19 es una organización internacional de derechos humanos que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Véase: https://articulo19.org/ y https://www.article19.org/regional-office/mexico-and-central-america/

África. Lo anterior ha provocado que la población oriunda de Tapachula e, incluso, migrantes de otros países, guarden distancia física de las y los migrantes africanos por temor a «contagiarse».

Las expresiones acerca de la migración africana, así como las narrativas presentes en Tapachula sobre otras poblaciones de distinta procedencia —incluyendo el viejo discurso difamatorio que tilda a los hombres migrantes de Centroamérica de «delincuentes»— han permitido identificar que la desinformación así como los discursos ofensivos y los discriminatorios son las manifestaciones más comunes al tratar el tema de las y los migrantes y su proceso migratorio. Aunado a esto, se han dado algunos episodios de discurso de odio,[12] aunque de forma aislada y poco frecuente.

A las mujeres, en particular, se les asocia y juzga desde los roles de género, sexualidad y apariencia física. De acuerdo con el testimonio de una periodista, incluso en los chats de WhatsApp de hombres periodistas, se comparten fotografías de las mujeres hondureñas, que estos toman deliberadamente mientras realizan coberturas en torno al tema, así como «memes»[13] que las sexualizan. Por otro lado, de acuerdo con lo aseverado por otra periodista, el conjunto de narrativas asociadas a estas mujeres ha derivado en «justificar» la discriminación social y laboral hacia ellas. Desde hace años «a las hondureñas se les dice «roba maridos», y estas narrativas siguen ocasionando que las mexicanas rechacen su presencia en la sociedad y decidan no contratarlas como trabajadoras domésticas, por temor a poner en riesgo sus matrimonios.

Lo anterior deja la interrogante de si los silencios, contradicciones y declaraciones de las autoridades podrían, acaso, formar parte de una estrategia para extender una narrativa de desinformación que, de alguna manera, fomente el apoyo hacia ciertas decisiones de política pública, como el endurecimiento y la militarización del control migratorio.

Ante este escenario de discursos intercambiados, los silencios y declaraciones del INM parecen abrir el paso a la generación de mayores dudas, incertidumbres y especulaciones respecto al tema de la migración. El INM: 1) no ha buscado desmentir reportajes que fomentan la xenofobia y la desinformación; 2) no da a conocer de manera transparente los recursos que le son asignados y cómo los ejerce, por lo que las narrativas que suponen que se están destinando mayores recursos públicos a los migrantes no pueden cotejarse con la información oficial y; 3) no se han hecho públicos los datos de cuántas personas migrantes han sido detenidas o son solicitantes de asilo,[14] lo que no permite conocer cuántas de ellas están efectivamente viviendo en Tapachula. Asimismo, se ha advertido la existencia de mensajes contradictorios sobre el tema entre el INM, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República.[15] Lo anterior deja la interrogante de si los silencios, contradicciones y declaraciones de las autoridades podrían, acaso, formar parte de una estrategia para extender una narrativa de desinformación que, de alguna manera, fomente el apoyo hacia ciertas decisiones de política pública, como el endurecimiento y la militarización del control migratorio.

Como se mencionó anteriormente, las motivaciones para emitir desinformación, discursos ofensivos, discriminatorios y de odio son múltiples e intrazables, debido a que no se puede comprobar su origen ni las razones para haberlas manifestado, por lo que sería prematuro inferir cualquier aseveración en ese sentido. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que este tipo de narrativas, alimentadas por las acciones y omisiones de las autoridades, están afectando la manera en la que la población mexicana se posiciona frente a temas de la agenda política, económica y social. Una encuesta de febrero de 2020 publicada por *El Financiero* revela, por ejemplo, que 64 por ciento de las y los mexicanos considera que deben cerrarse nuestras fronteras a la migración, mientras que 73 por ciento está de acuerdo con que la Guardia Nacional detenga el flujo migratorio.[16]

Deberes del Estado

Combatir la discriminación, la violencia y el odio requiere del compromiso del gobierno para fomentar una narrativa que contribuya a contrarrestar expresiones contrarias a los valores democráticos y de derechos humanos, y que abra caminos al diálogo informado, al intercambio de ideas y a propuestas que enriquezcan el debate público y la toma de decisiones.[17] Asimismo, se requiere que las instituciones del Estado reconozcan su deber y responsabilidad de que los discursos emanados en el ámbito de sus funciones y de naturaleza pública nunca sean expresiones falsas diseminadas de forma intencionada o deliberada, y se comuniquen con la sociedad conforme a ello.[18]

En lo que corresponde a la parte estructural que habilita mejores procesos de intercambio y apropiación de la información por parte de la población, frente a un contexto de desinformación y de discursos ofensivos, discriminatorios y de odio, los Estados tienen la obligación positiva de:

- 1) adoptar un marco legal y regulatorio apropiado para promover, incentivar y fomentar un entorno de comunicación libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios;
- 2) promover la alfabetización digital y mediática, involucrando a la sociedad civil y a otras partes interesadas en la concientización en torno a estas cuestiones y;
- 3) considerar otras medidas para fomentar la igualdad, la no discriminación, el entendimiento intercultural y otros valores democráticos, así como para contrarrestar los efectos negativos de la desinformación y la propaganda.[19]

La propagación de rumores de corte racista y sexista en contra de las personas migrantes, sumada a la intención de confundir a la población mediante la desinformación, es incluso más explosiva cuando se conjuga con la falta de claridad sobre diversos temas, incluida la situación migratoria de las y los migrantes. Esto lleva a que la solidaridad social en torno a estas personas en tránsito se vaya diluyendo, las redes de apoyo ciudadano se vayan menguando de manera significativa, o bien se confronte a quienes mantienen su apoyo a las y los migrantes. De este modo, cualquier acción represiva en contra de las y los migrantes será cada vez más tolerada en tanto se configure como una acción para «contenerlos», haciendo más vulnerable a esta población y atentando contra sus derechos humanos.

---

1 «Flujo migratorio se redujo 56% gracias a la estrategia migratoria implementada por México: Ebrard», Aristegui Noticias, 6 de septiembre de 2019. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/0609/mexico/flujo-migratorio-se-redujo-56-gracias-a-la-estrategia-migratoria-implementada-por-mexico-ebrard/ (Consultado: 10 de febrero de 2020).

2 El Instituto Nacional de Migración es la entidad del gobierno federal en México encargada de todos los procesos migratorios. Véase: «Contención, militares, reportes a Washington. Pues sí, México ya no es 'la mano tendida al migrante' ». Disponible en: Sin Embargo, 12 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/12-09-2019/3644320. (Consultado: 10 de febrero de 2020).

3 Arista, Lidia: «El 'muro mexicano' disminuye la migración a Estados Unidos», Expansión Política, 23 de enero de 2020. Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/23/el-muro-mexicano-disminuye-la-migracion-a-estados-unidos (Consultado: 10 de febrero de 2020).

4 Mientras que históricamente el flujo migratorio ha estado compuesto en su mayoría por hombres procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, desde 2018 ha aumentado la presencia de migrantes hombres, mujeres y menores de edad procedentes de Nicaragua, Cuba y Haití, así como de diversos países africanos y asiáticos. International Organization for Migration (2020): «Capítulo 3. Migración y Migrantes: Características y Novedades Regionales», *Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020,* 2019, pp. 120 y 121. Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_3.pdf. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación de México, a través del Instituto Nacional de Migración, informó que durante 2019 ingresaron al país alrededor de 1.17 millones de personas migrantes en condición irregular. De éstas, 179, 971 personas extranjeras con condición de estancia irregular fueron alojadas en las estaciones y estancias migratorias del país. Instituto Nacional de Migración: «INM informa sobre acciones en 2019 para mantener una migración segura, ordenada y regular«, Boletín No. 004/2020, 3 de enero de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/inm/prensa/inm-informa-sobre-acciones-en-2019-para-mantener-una-migracion-segura-ordenada-y-regular-231026?idiom=es (Consultado: 10 de febrero de 2020).

5 Actualmente no existe una definición consensuada del término y, desde ARTICLE19, consideramos que una definición nunca será suficiente en función de las múltiples dimensiones que implica el fenómeno como tal. Únicamente para fines de nomenclatura, la «desinformación» puede definirse como la propagación de información y propaganda con «el propósito de confundir a la población y para injerir en el derecho del público a saber y en el derecho de las personas a buscar y recibir, y también transmitir, información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras». Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión et.al. (2017): «Declaración conjunta sobre libertad de expresión y 'noticias falsas' ('fake news'), desinformación y propaganda». Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2.

6 Cualquier expresión que ofenda, perturbe o resulte chocante. ARTICLE 19 (2015): *Hate Speech Explained. A Toolkit,* Reino Unido. Disponible en: https://www.article19.org/resources/hate-speech-explained-a-toolkit/

7 Señalamientos a determinadas personas o poblaciones con características específicas para que éstas sean excluidas, segregadas o imposibilitadas de ejercer sus derechos. Torres, Natalia; Taricco, Víctor (2019): *Los discursos de odio como amenaza a los derechos humanos,* Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Argentina. Disponible en: https://www.palermo.edu/Archivos_content/2019/cele/Abril/Los-discursos-de-odio_Torres-y-Taricco.pdf

8 No existe una definición consensuada de lo que es un «discurso de odio», pero éste puede caracterizarse como «cualquier tipo de expresión que manifieste una emoción intensa e irracional de oprobio, enemistad y aversión hacia un individuo o grupo de personas, respecto de características personales [...]». Para calificarlo como tal, se deben evaluar elementos como el daño causado por la sola expresión y sus consecuencias, la existencia de una relación causal entre la expresión y el daño específico que genere, que el daño sea probable o inminente, la intención de causar dicho daño y el grado de difusión de la expresión.

ARTICLE 19 (2015): op. cit., pp. 9-11.

[9] Ibid.

[10] Lo aquí referido forma parte de un ejercicio de sistematización y análisis de las experiencias, testimonios, puntos de vista y consideraciones de las y los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que participaron en el taller «Migración y Desinformación», organizado por ARTICLE19, en colaboración con R3D-Red en Defensa de los Derechos Digitales y el Laboratorio de Investigación Social 'Justicia en Movimiento', con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. El taller tuvo lugar en Tapachula, Chiapas, el 27 y 28 de septiembre de 2019. Todos los testimonios e ideas que se expresan a continuación fueron obtenidas del taller. Por tanto, las expresiones de las personas participantes no reflejan necesariamente los puntos de vista de ARTICLE 19.

[11] Lo cual es particularmente significativo, ya que según los datos del último Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México realizado, WhatsApp y Facebook son dos de las cinco principales plataformas de redes sociales más utilizadas por las y los mexicanos. Asociación de Internet (2018): *14º Estudio de hábitos de los usuarios de internet en México, 2018*. Disponible en: https://irp-cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/14%2BEstudio%2Bsobre%2Blos%2BHa_bitos%2Bde%2Blos%2BUsuarios%2Bde%2BInternet%2Ben%2BMe_xico%2B2018%2Bversio_n%2Bpu_blica.pdf (Consultado: 10 de febrero de 2020).

[12] Según la declaración de un periodista anónimo, en Tapachula se ha registrado la existencia de expresiones que han incitado a prender fuego a la estación migratoria Siglo XXI. Estas expresiones fueron compartidas (sin capacidad de comprobar por quién fueron generadas) por civiles que funcionan como referentes en la comunidad, y en un contexto de malestar social que se caracteriza por un sentimiento de animosidad con respecto a las y los migrantes. No obstante, debido a que no existe un nexo causal entre la expresión y que un daño se haya materializado o pudiese haberse materializado a consecuencia de la misma, este tipo de «discurso de odio» está protegido al amparo del Artículo 19(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, esa protección no es impedimento para que estas expresiones no sean motivo de preocupación en términos de intolerancia y discriminación, y merezcan una respuesta crítica por parte del Estado.

[13] Un 'meme» es una imagen, video o texto, por lo general distorsionado, con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet [NdR].

[14] Pradilla, Alberto: «Migración detiene y encierra a solicitantes de refugio pese a tener papeles», Animal Político, 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/10/migracion-detencion-migrantes-refugio-chiapas/. (Consultado: 10 de febrero de 2020).

[15] González, Isabella: «Acusan descoordinación en migración», Reforma, 29 de enero de 2020. Disponible en: https://www.reforma.com/acusan-descoordinacion-en-migracion/ar1863693?__rval=1. (Consultado: 10 de febrero de 2020).

[16] La Guardia Nacional, creada en 2018, es una institución que funge como policía nacional de México y está conformada por fuerzas civiles, militares, navales y federales. Véase: Moreno, Alejandro: «Inicia AMLO 2020 con respaldo de 71%», El Financiero, 4 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inicia-amlo-2020-con-respaldo-de-71. (Consultado: 10 de febrero de 2020).

[17] ARTICLE 19 (2019): «Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva», Informe anual 2018, México, p. 204. Disponible en: https://articulo19.org/wp-content/uploads/2019/05/Ante-el-Silencio-Ni-Borron-Ni-Cuenta-Nueva_ABRv2.pdf

[18] Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión et.al. (2017): op. cit.

[19] Ibid.

Negacionistas en el poder: crisis de confianza y colapso medioambiental en Brasil

Tatiana Roque

El concepto de desinformación radica en la producción de información comprobadamente falsa o engañosa. Esta se gesta y divulga con la intención de conseguir ventajas económicas o políticas y con el objetivo deliberado de engañar a la población. Esta definición tiene, sin embargo, un punto débil: *asume* que las personas están siendo engañadas y que *por esta razón* no confían en las instituciones. En realidad se trata de una relación mucho más compleja. En la actualidad, estamos presenciando una crisis de confianza que está afectando a todas las instituciones en general. Incluso la ciencia se ve afectada, como puede comprobarse actualmente con la pandemia del coronavirus, durante la cual se han puesto en duda los resultados de estudios científicos en países como Estados Unidos, Brasil y Francia. La ascensión de la extrema derecha está provocando una ola de negacionismo y de movimientos anticientíficos que se está convirtiendo en una tragedia durante esta pandemia.

Una vez que se haya superado la crisis del COVID-19, será aún más urgente movilizar a las personas para actuar en contra del colapso climático. Después de décadas investigando y participando activamente en la creación de acuerdos internacionales para la protección del medioambiente, es preocupante que la causa medioambiental no sea acogida con gran popularidad en Brasil. No obstante, culpar a los actuales gobernantes y a la desinformación no es suficiente. El desinterés que muestran incluso los gobiernos más progresistas en relación al tema medioambiental refleja la indiferencia de la mayor parte de la población, confirmada por la ausencia total del debate sobre temas medioambientales durante las campañas electorales. Sin embargo, con el gobierno de Jair Bolsonaro la situación está empeorando, ya que este está haciendo uso del negacionismo científico como instrumento de una política medioambiental criminal.

La ascensión de la extrema derecha está provocando una ola de negacionismo y de movimientos anticientíficos que se está convirtiendo en una tragedia durante la pandemia.

Negacionismo medioambiental

Durante su campaña electoral, Jair Bolsonaro amenazó con cancelar la participación de Brasil en el Acuerdo de París, siguiendo el ejemplo de su ídolo, Donald Trump. Desde entonces ha estado instrumentalizando el temor infundado de una internacionalización de la Amazonia. Si bien el presidente no cumplió con su amenaza de retirarse de dicho Acuerdo, sí nominó como ministro para asuntos medioambientales a Ricardo Salles —un personaje afín a *think tanks* negacionistas— y a un canciller que considera que el calentamiento global no es más que un complot marxista. En un vídeo de una reunión de ministros,[1] Salles dice, literalmente, que el gobierno debería aprovechar la pandemia para aprobar una desregulación de la política medioambiental.

En Brasil es cada vez más evidente que la ascensión de la extrema derecha está directamente relacionada con el negacionismo climático, el cual se ha convertido en la política de Estado actual. Es de conocimiento público que las organizaciones negacionistas han organizado una acción concertada para «desmentir» las conclusiones de los estudios científicos sobre el cambio climático. Se les denominó «mercaderes de la duda» y empezaron su acti-

Tatiana Roque, Brasil, es profesora brasileña de Filosofía e Historia de la Ciencia en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Tatiana Roque estudia el fenómeno de la posverdad y su relación con la crisis mundial de la democracia. Coordina el Foro de Ciencia y Cultura de la universidad UFRJ y es vicepresidenta de la Red Brasileña de Renta Básica.

vidad alrededor de 1990.[2] Como era imposible negar el calentamiento global provocado por los seres humanos, la única salida fue revestirlo de controversia. En aquel entonces se usó un argumento similar al que hoy defiende el gobierno de Bolsonaro: bajo el disfraz de la protección medioambiental se esconde un complot internacional para disminuir la libertad de libre elección de los ciudadanos y el poder de empresas que benefician al pueblo (ya que estas producen riqueza y generan empleos), y garantizan la soberanía del país.

Mientras que en países como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido el negacionismo climático es alimentado por agentes financiados por la industria de combustibles fósiles, en Brasil es principalmente el sector ligado a la economía agraria el que ayuda a diseminar las dudas respecto a los datos medioambientales. No es casualidad que este sea justamente el sector económico que más contribuye al calentamiento global en nuestro país.

En agosto de 2018, el presidente Jair Bolsonaro despidió a Ricardo Galvão, director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), por divulgar datos correctos sobre el dramático incremento de la deforestación de la Amazonia. En 2019, varios parlamentarios procedentes de la base de apoyo de Bolsonaro invitaron a Luiz Carlos Molion, meteorólogo jubilado de la Universidad Federal de Alagoas, así como a otros dos conocidos negacionistas brasileños, para impartir una serie de conferencias sobre el territorio del Amazonas. En sus conferencias, Molion se vale de mentiras que han sido rebatidas por la ciencia desde hace tiempo y las apoya con gráficos y jerga técnica. Estos parlamentarios son los mismos que defienden un proyecto de ley para acabar con la reserva legal prevista en el Código Forestal, es decir, la zona en las propiedades rurales que por ley debe ser preservada de la explotación por sus propietarios.

El agrónomo Evaristo de Miranda, director de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA),[3] consiguió respaldar a través de los canales oficiales de la organización y las redes sociales el falso argumento de que la expansión de las zonas forestales deja poco espacio para la economía agropecuaria. Su segundo argumento se centra en la idea de que las zonas de protección natural, las zonas indígenas protegidas, los asentamientos de reforma agraria[4] y las reservas rurales de bosque inviabilizan el desarrollo del país. De Miranda apoya su argumento añadiendo una teoría conspirativa: en su opinión, la agenda ambiental vigente forma parte de un plan de los países desarrollados para expandir sus propias economías agrícolas mediante el bloqueo del potencial competitivo de Brasil en este sector. Los embustes argumentales de Miranda han sido ampliamente denunciados por actores como la coalición de organizaciones civiles Observatorio del Clima en el vídeo «Hechos acerca del bosque».[5] A pesar de ello, de Miranda sigue contando con una considerable influencia en el gobierno.

Resulta preocupante que un gobierno tan mentiroso cuente con el apoyo de una buena parte de la población. Aunque la catastrófica gestión de la pandemia esté minando lentamente la popularidad de Bolsonaro, es necesario analizar las razones que lo llevaron a ganar las elecciones y a mantener un considerable apoyo.[6] Argumentar que la ignorancia es la única causa es un error, pues el presidente cuenta con un apoyo significativo entre los grupos con los más altos niveles de cultura y escolarización. Un análisis del instituto de investigación Datafolha,[7] publicado en diciembre de 2019, muestra que la situación del medioambiente, incluso después de haberse reducido nuestra infraestructura de protección medioambiental, era considerada óptima por un 27 por ciento de los entrevistados, y regular por un 38 por ciento. Las cifras son altas, y es aún más grave si tenemos en cuenta los incendios en el Amazonas y la catástrofe petrolera ocurrida en 2019 en la costa brasileña, para la que en ese momento no hubo ningún plan de contención.

Crisis de confianza

El negacionismo prospera en un ambiente social desgastado por la pérdida de confianza de la población en las instituciones. Aprovechar esta desconfianza para legitimar a gobernantes con posiciones anticientíficas e insertar el negacionismo en la maquinaria estatal ha sido un movimiento ingenioso por parte de la extrema derecha.

El negacionismo prospera en un ambiente social desgastado por la pérdida de confianza de la población en las instituciones.

El estudio de Wellcome Global Monitor, una encuesta británica de 2018, alertaba ya desde entonces sobre una crisis de confianza en la ciencia. En el grupo en el que se categoriza a Brasil, el de los países de renta media a alta, un 54 por ciento de los habitantes confía apenas medianamente en la ciencia.[8] Existe,

además, una clara correlación entre la desconfianza en la ciencia y el descrédito de otras instituciones: todo aquel que duda del conocimiento científico, generalmente desconfía también de los gobiernos, los ejércitos o la justicia. Este sentimiento va acompañado de un escepticismo general respecto al establishment, es decir, respecto al sistema político y a las instituciones, que va en incremento en el país y que contribuyó a la victoria de Bolsonaro. El escepticismo juega además un papel muy importante en la forma cómo la población percibe el impacto de los resultados científicos en su vida cotidiana: en Brasil, el grupo de los que piensan que la ciencia no les beneficia personalmente (ni beneficia a la mayoría de la sociedad) representa el 23 por ciento de la población. Un resultado alarmante, similar a la media que encontramos en Sudamérica y Centroamérica, y que no tiene ninguna relación con la categoría de ingresos a la que pertenecen los encuestados.

El hecho de que el fundamentalismo religioso se haya expandido en Brasil no es razón suficiente para explicar este fenómeno. La creciente importancia de la religión en la vida cotidiana se debe al vacío dejado por las instituciones y por el Estado. En la actualidad, un gran número de personas únicamente cuenta con la Iglesia como apoyo material, moral y cotidiano para paliar sus temores y angustias relativas al desempleo, sus ingresos, la asistencia sanitaria y, principalmente, en relación a la falta de perspectivas de futuro.

Además de la desconfianza en la ciencia, la encuesta de Wellcome Global Monitor mostró que un tercio de los brasileños confía poco en las organizaciones no gubernamentales. Este recelo tiene una influencia directa en la política relativa a la Amazonia, ya que Bolsonaro y sus ministros vienen atacando frontalmente desde hace tiempo a las organizaciones no gubernamentales, principalmente a aquellas que actúan en el área medioambiental. Incluso han llegado a insinuar que estas podrían estar detrás de los incendios en el Amazonas o el derrame de petróleo que afectó a las playas del noreste de Brasil.[9] La desconfianza en las ONG ayuda a entender por qué estas acusaciones sin fundamentos no generan ninguna reacción en la población o, incluso, llegan a ser aceptadas por una parte considerable de la misma.

Las personas no son engañadas con informaciones falsas: son incitadas a cooperar en la desligitimación pública de las instituciones.

La soberanía sobre el territorio del Amazonas está unida a una tradición nacionalista brasileña, que facilita la adhesión a este discurso conspiratorio. Por un lado, las ONG son consideradas mecanismos internacionales que se inmiscuyen en asuntos internos. Por otro lado, las personas no son conscientes de las ventajas económicas que la preservación del medioambiente tiene en sus vidas. De hecho, resulta difícil convencer a las personas de que el modelo de explotación en realidad empobrecerá a los brasileños y a la larga los desproveerá de sus riquezas naturales. Los beneficios intangibles son demasiado abstractos, más para una población que sufre cotidianamente con la falta de ingresos y de una política de bienestar. Es así como las personas se vuelven receptivas a los discursos conspiratorios, esperando sacar así alguna ventaja material o moral, hecho que fortalece la posición de los gobernantes. En pocas palabras, las personas no son engañadas con informaciones falsas: son incitadas a cooperar en la deslegitimación pública de las instituciones.

Por todo esto tenemos dos importantes mandatos: el primero consiste en que el movimiento de protección del medioambiente debe conseguir movilizar a más personas, principalmente entre los grupos de población más vulnerables, lo que solo será posible si se muestran soluciones a sus problemas actuales. Cambios en los hábitos de consumo y transporte, alimentación, nuevas perspectivas de trabajo o de futuro para sus hijos: estos son los temas esenciales y están relacionados con profundas transformaciones políticas. El segundo mandato es que las medidas para evitar el colapso climático no se restrinjan a una cúpula de especialistas, como tampoco basta apoyarse en datos y en el consenso científico. Hoy en día se pone en duda a periodistas, intelectuales, profesores, expertos y científicos, lo que dificulta su actuación como mediadores entre el poder político y la opinión pública en general. Esto se debe a que, al establecer una relación cada vez más directa con la población, el negacionismo ha ido deslegitimando el papel de los intermediarios: cada vez más portavoces desprovistos de credenciales profesionales o académicas alegan ser una autoridad capaz de divulgar verdades, ya sea mediante el contacto directo con el público, o a través de las redes sociales. Es así como los nuevos formadores de opinión conquistan a millones de seguidores y se disputan la facultad de influenciar al poder público. En Brasil, incluso, han llegado a participar activamente en el gobierno. Al adoptar una postura convincente, estos nuevos líderes conquistan la confianza de una buena parte

de la población. Esto produce un descrédito de los verdaderos profesionales, cuyas afirmaciones acostumbraban ser legitimadas a priori con base en la autoridad con la que cuentan para gestionar información no accesible para todo el mundo.

Por todas estas razones, conquistar y dialogar con aquellos que han estado apartados del debate público es una condición indispensable para neutralizar el discurso negacionista. Esto también significa que debemos abandonar nuestro propio «rincón de sabios» y llevar este debate a otros ámbitos que van más allá de nuestro propio radio de acción.

Traducción del portugués: Gloria Fochs Casas

---

1 CNN-Brasil: «STF divulga ÍNTEGRA do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril» (vídeo), YouTube, 22 de mayo de 2020. Disponible en: https://youtu.be/TjndWfgiRQQ (Consultado: 23 de abril de 2020).

2 Oreskes, Naomi; Comway Erik M. (2010): Merchants of Doubt, New York, Bloomsbury Press.

3 La Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAMPA) es una empresa que se dedica al desarrollo de conocimiento y tecnología para la economía agropecuaria brasileña y está vinculada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.

4 Nota del T.: En el marco de la reforma agraria el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) otorga parcelas de terreno a personas sin propiedades con el objetivo de colonizar y administrar esas zonas.

5 Observatório do Clima: «Fatos Florestais» (vídeo en portugués), 29 de abril de 2019. Disponible en: http://www.observatoriodoclima.eco.br/mitos-producao-conservacao-no-pais/ (Consultado: 23 de abril de 2020).

6 N. de la R.: Entretanto ha cambiado nuevamente la situación. Gracias al paquete de apoyo económico por la pandemia de COVID-19 para la población más pobre, su índice de aceptación ha llegado a un nivel jamás alcanzado hasta el momento.

7 Globo: «Pesquisa Datafolha aponta Moro com aprovação de 53%, acima de Bolsonaro», 9 de diciembre de 2019. Disponible en: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/09/pesquisa-datafolha-aponta-moro-com-aprovacao-de-53percent-acima-de-bolsonaro.ghtml (Consultado: 23 de abril de 2020).

8 Gallup (2019): *Wellcome Global Monitor- First Wave Findings. How Does the World Feel about Science and Health? 2018.* Disponible en: https://wellcome.ac.uk/sites/default/files/wellcome-global-monitor-2018.pdf (Consultado: 23 de abril de 2020).

9 Mazui, Guilherme: «Bolsonaro diz que ONGs podem estar por trás de queimadas na Amazônia para 'chamar atenção' contra o governo», Globo, 21 de agosto de 2019. Disponible en: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/21/bolsonaro-diz-que-ongs-podem-estar-por-tras-de-queimadas-na-amazonia-para-chamar-atencao-contra-o-governo.ghtml (Consultado: 23 de abril de 2020).

#NI UNA MENOS

Cuando el silencio también habla: medios de comunicación y minorización de la violencia contra las mujeres en El Salvador

Laura Aguirre

El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, es uno de los países más violentos del mundo. Con 6.5 feminicidios por cada 100 mil mujeres es reconocido como uno de los países más peligrosos para las mujeres.[1] Tan solo durante el período de confinamiento por la emergencia de COVID-19, ocurrido del 12 de marzo al 15 de junio de 2020, 26 mujeres han sido asesinadas,[2] mientras que las llamadas de emergencia o para pedir ayuda aumentaron en un 70 por ciento.[3]

En 2017, el Estado salvadoreño publicó una encuesta nacional en la que se estima que 67 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. De éstas, solo el 6 por ciento interpuso una denuncia formal.[4] Entre las razones por las que las mujeres deciden no acudir al sistema de justicia están el miedo a represalias, el temor a ser estigmatizadas y revictimizadas, y la desconfianza en el sistema.[5] Las probabilidades de obtener justicia son, de hecho, mínimas: entre 2018 y 2019, solo el 12 por ciento de las 6,305 denuncias interpuestas por delitos contra la libertad sexual llegaron a sentencia condenatoria.[6]

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una extensión de los lugares donde se concretan distintas formas de violencia contra las mujeres, como acoso sexual, hostigamiento, desacreditación, amenazas u otro tipo de delitos. De acuerdo a datos de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), por la naturaleza de sus casos, a al menos 10 por ciento de las víctimas de violencia intrafamiliar que atiende la organización se les ha recomendado cerrar o no tener cuentas en redes sociales.[7]

El movimiento #metoo en El Salvador

Las redes sociales, sin embargo, no son solamente armas de la misoginia, sino también herramientas para la creación de contra-narrativas. En agosto de 2019, un tuit con el *hashtag* #metoo[8] desató una ola de denuncias en las redes sociales de El Salvador. Una lista de nombres se formó y circuló durante varias semanas por redes sociales y en grupos de WhatsApp. Entre los nombres que se divulgaron estuvieron los de varios comunicadores y periodistas. La mayoría de las denuncias fueron hechas desde el anonimato.

Las críticas a estas acciones fueron similares a las que el movimiento #metoo ha recibido en otras partes del mundo: las mujeres deberían usar los canales oficiales para hacer estas denuncias, porque de no hacerlo, trasgreden la presunción de inocencia de los señalados.

Los grandes medios de comunicación, tradicionales y digitales, por su parte, ignoraron lo que pasó en el espacio virtual. Se mantuvieron en absoluto silencio y, como en otros países, las voces de las mujeres fueron deslegitimadas con el argumento de que cualquier denuncia hecha desde el anonimato carece de valor periodístico.

Laura Aguirre, El Salvador, es cofundadora y directora del medio digital feminista Alharaca. Vive en México, El Salvador y Alemania. Es doctora en sociología por la Universidad Libre de Berlín. Desde hace una década, sus investigaciones se centran en la migración de mujeres, el trabajo sexual, las desigualdades y la violencia de género. Su trabajo ha sido publicado en medios como: ElFaro.net, Revista Factum, Univisión y openDemocracy. En 2017, ganó el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (COLPIN) y el Premio IDEA a la Innovación y el Periodismo.

Minimización y normalización de la violencia contra las mujeres

Un reporte de la UNESCO del 2019 nos recuerda que uno de los deberes del periodismo es convertirse en una herramienta para ayudar a romper el silencio sobre la violencia de género y promover un cambio social al respecto.[9] Sin embargo, posicionar este tema es una lucha que se ha encontrado con muchos obstáculos en el interior mismo de los medios de comunicación. En las salas de redacción y producción de los medios salvadoreños prevalece el machismo y la misoginia, a través de una serie de mecanismos que normalizan la violencia contra las mujeres y minorizan el problema.

En 2018, se publicó un diagnóstico sobre las desigualdades que enfrenta las periodistas en sus lugares de trabajo por su condición de género. El 90.38 por ciento de las entrevistadas afirmó que dentro de los medios de comunicación existen prácticas discriminatorias hacia las mujeres.[10]

La antropóloga y feminista, Rita Segato, explica que una de las características de la violencia hacia las mujeres es que ha sido naturalizada como una realidad inamovible, y es justificada, además, en códigos y valores esparcidos desde las instituciones. De este modo, aprendemos a percibir las conductas violentas como «normales», a culpabilizar a las mujeres y a calificar las denuncias, muchas veces, de meras exageraciones o quejas sin credibilidad o legitimidad.[11] Anudada a esta *normalización* existe también una patente *minorización* de la violencia contra las mujeres, que se expresa de diferentes maneras. Siguiendo a Segato, a esto se suma que las mujeres son tratadas como «menores».[12]

Dentro de la práctica periodística, la expresión más común de esta minorización es la reducida cobertura que existe sobre el tema. Las pocas veces que existe —con sus excepciones— suele consistir de abordajes poco rigurosos, sin conocimiento de la perspectiva de género, ni de límites éticos, en los que la violencia y los cuerpos de las mujeres se convierten en un espectáculo masivo, cotidiano y trivial.

Uno de los temas recurrentes en los encuentros y congresos de periodistas feministas de Latinoamérica es la lucha cotidiana para posicionar la perspectiva de género. Muchas periodistas han tenido que enfrentar a jefes y colegas que desdeñan los temas con dos argumentos: que trabajar desde una perspectiva de género es hacer activismo y no periodismo; y que hacer coberturas de tópicos que muestran los efectos derivados de la condición de género es hablar de «problemas de mujeres». Ambos argumentos alimentan un discurso que guetifica estos temas haciéndolos parecer como no universales, ni importantes para la sociedad en general. En otras palabras, la causa de las mujeres es marginal y de interés parcial.

Otra expresión de esta normalización y minorización se puede apreciar en las redes sociales, donde no son raras las agresiones verbales de periodistas hombres —incluyendo a los periodistas más reconocidos— en contra de colegas mujeres o feministas activistas, en las que banalizan la perspectiva de género. Incluso la gravedad de los feminicidios está subestimada.[13]

Estas prácticas que relegan y oscurecen el tema de la violencia contra las mujeres generan desinformación. Perpetúan, primero, una socialización desde la desigualdad al marginalizar u omitir un fenómeno que afecta a toda la sociedad, haciéndolo pasar por «irrelevante»; y, segundo, al invisibilizar o minimizar la responsabilidad de los hombres como ejecutores de esa violencia, favorecen una narrativa que legitima esa violencia.

Hacer «Alharaca»: el periodismo feminista como resistencia

Estas condiciones sociales y culturales, sin embargo, también han funcionado como aliciente y condición para construir alternativas y nuevos espacios dentro del ecosistema de los medios de comunicación en El Salvador. De este modo, a la lucha por romper los techos de cristal que se lleva a cabo dentro de los medios tradicionales impresos y digitales, se han sumado nuevos medios, sobre todo digitales, más diversos e inclusivos. *Alharaca*, *Agencia Presentes, La Brújula, La palabra incómoda* y *Gato Encerrado* son algunos ejemplos de estos espacios. Todos abocados a la reapropiación de las narrativas y las historias de las mujeres, con el fin de ponerlas en el centro de los discursos mediáticos como asuntos que atañen a toda la sociedad.

Alharaca[14] nació en febrero de 2018. Crearla fue una necesidad: tener una «habitación propia», autogestionada y autosostenible, para hablar sobre género y diversidad. Esto en un país en el que las personas con

más poder en la mayoría de los medios de comunicación siguen siendo hombres.

El periodismo que promueve *Alharaca* lleva intrínseca la perspectiva de género y va más allá de contar historias. *Alharaca* cree en un periodismo con el potencial de transformarse e innovar en los formatos y métodos de investigación, para visibilizar mejor las realidades particulares de las mujeres y personas de la diversidad.

Ante el silencio que predominó en los medios cuando surgió el movimiento #metoo El Salvador, *Alharaca* publicó el especial *¿Por qué no denuncié?*.[15] Para hacerlo, pidieron a través de redes sociales que, de manera anónima, diversas mujeres compartieran con *Alharaca* las razones por la cuales, al haber sufrido algún tipo de violencia, habían decidido no acudir a las instituciones de justicia.

El anonimato de las voces de las mujeres permitió, además, dejar de centrar la atención en la víctima y volver la mirada al Estado y a su responsabilidad como garante de la seguridad y de los derechos de las mujeres. Cada uno de los testimonios recolectados coincidió y se convirtió en una prueba vívida de lo que las investigaciones y los reportes oficiales han reconocido: que las mujeres no denuncian la violencia que sufren porque el sistema de justicia no funciona para ellas.

Alharaca tiene muy claro que es un medio periodístico y que, por ello, dentro de sus obligaciones está la de fiscalizar al Estado. No es ministerio público, por lo que su deber no es probar si las mujeres que denuncian violencia mienten o no, pero sí visibilizarla y ponerla en la agenda pública. De la academia ha adoptado metodologías para contrastar y verificar la información, triangulando, por ejemplo, los testimonios con investigaciones académicas, informes oficiales y de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

El camino para lograr un sociedad justa y segura para las mujeres es aún largo. Desde su campo, las periodistas están intentado contribuir a este proceso luchando contra la desinformación a través de agendas y coberturas más diversas e inclusivas, que posicionan la violencia y la discriminación contra las mujeres como un tema no solo importante, sino que atañe a la sociedad completa y del que deberíamos ocuparnos todos y todas.

¿Por qué no denuncié?

«Me iban a tener como puta»

«Mi madre iba a decir que era mi culpa»

«Me siento intimidada porque es catedrático»

«Él puede atacarme profesionalmente»

«No podía comprobar el abuso psicológico y las estafas»

«Miedo y vergüenza»

«Yo sí denuncié pero ha sido una experiencia horrible»

Enlace a testimonios en audio:
www.alharaca.sv/especiales/por-que-no-denuncie/

[1] Cálculo propio con base en datos del Portal de Transparencia del Órgano Judicial, Corte Suprema de Justicia. Disponible en: http://www.transparencia.oj.gob.sv/es (Consultado: 1o de junio de 2020).

[2] Red Feminista de El Salvador frente a la Violencia contra las Mujeres. Disponible en: http://observatorioviolencia.ormusa.org/monitoreos.php (Consultado: 12 de junio de 2020).

[3] Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Disponible en: http://ormusa.org/organizaciones-lanzan-campana-de-sensibilizacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-el-marco-de-la-emergencia-por-covid-19/ (Consultado: 30 de mayo de 2020).

[4] Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC): Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, El Salvador, 2017. Disponible en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/eviolencia2018/index.aspx (Consultado: 5 de abril de 2020).

[5] Ministerio de Justicia; DIGESTY: *Informe sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres 2016-2017.* Este informe señaló que entre 2015 y 2017 se registró un promedio de 13 denuncias diarias por delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Más de un delito cada dos horas. Disponible en: https://infosegura.org/2018/06/12/violencia-contra-las-mujeres-leiv-2016-2017/ (Consultado: 2 de abril de 2020).

[6] Fiscalía General de la República: *Memoria de labores 2018-2019.* Disponible en: http://www.fiscalia.gob.sv/medios/memorias-pdf/Memoria-de-Labores-2018-2019.pdf (Consultado: 2 de abril de 2020).

[7] ORMUSA en: Rodríguez, Margarita (2014): «Las redes sociales, ¿el nuevo ring de la violencia de género?», BBC Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101125_violencia_genero_redes_sociales_internet_facebook_mr.shtml (Consultado: 1o de junio de 2020)

[8] Véase: https://twitter.com/hfttsv

[9] UNESCO (2019): «Reporting on Violence against Women and Girls: a Handbook for Journalists». Disponible en: https://en.unesco.org/news/reporting-violence-against-women-and-girls-unesco-launches-new-publication (Consultado el 20 de abril de 2020).

[10] Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos - El Salvador: *Diagnóstico sobre el entorno de trabajo de las mujeres periodistas y comunicadoras sociales de El Salvador. Informe 2018.* Disponible en: https://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2018/01/DIAGNO%CC%81STICO_MUJERES_PERIODISTAS_Y_COMUNICADORAS_ESA.pdf (Consultado 15 de abril de 2020).

[11] Segato, Rita Laura (2016): *La guerra contra las mujeres, Traficantes de Sueños,* Madrid, pp. 91-106.

[12] Ibid.

[13] En un país como El Salvador, en el que más del 90 ciento de las víctimas de homicidios son hombres, algunos periodistas aún sugieren que hablar de los asesinatos de mujeres como un problema específico responde a una causa feminista que intenta oscurecer los asesinatos abrumadoramente mayoritarios de hombres. Véase: Roberto Valencia, «Violentados por tener pene», Los blogs de el faro, 20 de noviembre de 2017. Disponible en: https://bit.ly/2YwgK6j y mi respuesta en: Laura Aguirre, «Denunciar las violencias no es una competencia de cifras», El Faro, 24 de noviembre de 2017. Disponible en: https://bit.ly/2UBW0Ja (Consultados: 1o de junio de 2020).

[14] La palabra 'alharaca' se usa generalmente de manera despectiva para decir que alguien —frecuentemente una mujer— está siendo exagerada y emocional sobre un tema que se considera poco importante. Sus fundadoras la escogieron como una provocación y una reivindicación de esas historias y personas que aún tienen poco espacio en el periodismo y en el mundo digital.

[15] Este trabajo fue publicado en octubre de 2019 y fue seleccionado para ser presentado en el Global Festival of Action 2020, que se iba a llevar a cabo en Alemania. Disponible en: https://especial.alhara.ca/por-que-no-denuncie/home (Consultado: 20 de abril de 2020).

Fake News: desinformación y censura en Colombia

Diana Salinas

«No». Marcando una negativa en una decisión política crucial fue como Colombia le llegó con fuerza al fenómeno de las *fake news*. Visto dos años después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la estrategia de campaña del bando del 'No' pareció un rito de iniciación. Corría octubre del 2016 cuando el político Carlos Vélez Uribe le contaba a una periodista que en su partido habían descubierto «el poder viral de las redes sociales». Este político no era cualquiera. Era miembro del Centro Democrático, partido de derecha, formado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Su candidato, Iván Duque, es presidente de Colombia para el periodo de 2018 a 2022.

Carlos Vélez Uribe fue el gerente de la campaña por el 'No a la paz' en el plebiscito que preguntó a los colombianos en 2016 si avalaban o no los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El proceso de paz inició el 4 de septiembre del 2012 y, cuatro años después, se estaba firmando en Cartagena, el 26 de septiembre del 2016. El gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos estableció que esos acuerdos, plasmados en el *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*,[1] debían ser refrendados por los colombianos y colombianas.

Fue en una entrevista con Carlos Vélez Uribe, en la que se atrevió a revelarlo sin esconder nada, que terminaría por marcar el inicio de la llegada exitosa de las *fake news* a las campañas electorales y políticas:

—¿Cuál fue la estrategia?— le preguntó la periodista al gerente de la campaña por el No.[2]

En su respuesta, Carlos Vélez Uribe explicó que en varias regiones hicieron circular mensajes confusos sobre lo que iba a pasar si se firmaba el Acuerdo de Paz. Tomaron, por ejemplo, una foto de Juan Manuel Santos y «Timochenko», comandante de las FARC, y le añadieron un mensaje en el que se decía que los «terroristas» —refiriéndose a los guerrilleros— de ese momento en adelante recibirían dinero del Estado. Esa estrategia de *fake news* logró compartirse 130 mil veces, con un alcance de seis millones de personas.[3]

En aquel momento, el ambiente era de crispación. La opinión estaba dividida.[4] En el bando de los del 'Sí al Acuerdo' estaban casi todos los funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos y sus simpatizantes, más población perteneciente a organizaciones a favor de la paz y de derechos humanos. En el bando del 'No' estaba el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, opositor acérrimo de los Acuerdos y de la política del expresidente Santos; también su grupo político y muchas personas adeptas a Álvaro Uribe.

—La campaña del 'Sí' fue basada en la esperanza de un nuevo país, ¿cuál fue el mensaje de ustedes?— preguntó la periodista a Carlos Vélez Uribe.

—La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca[5]— respondió el político.

La indignación consistió en revolver heridas de guerra para que la gente se opusiera al proceso de paz, reaccionando desde el resentimiento y el dolor. Tras la entrevista, la periodista fue retirada del medio. Sin embargo, los colombianos y colombianas se dieron cuenta, por primera vez, que la desinformación logró ser un factor determinante para que el 'No' ganara la contienda política con el 50.21 por ciento de la votación. Nada de lo que se hacía antes por debajo de la mesa como compra de votos, repartición de cargos públicos a cambio de votos y trashumancia resultó[6] ser tan potente como las *fake news*.

Fue como el bautizo de la pérdida de la

Diana Salinas, Colombia, es editora en jefe de Cuestión Pública. Literata, feminista y periodista de investigación con años de experiencia en La Nación (Argentina), Noticias Uno, Cuatro Caminos de Canal RCN, entre otros. Ganadora de tres Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar. Varios de sus reportajes han puesto en evidencia casos de despojo y corrupción de grandes figuras públicas colombianas. Colaboradora del libro *Memorias: 12 historias que nos deja la guerra,* sobre las historias profundas y desconocidas del conflicto armado en Colombia.

inocencia electoral. La cachetada del poder de las redes sociales como canal de comunicación de la información que moldea la opinión pública. Y en tiempos electorales moldea, a base de influencia y desinformación, las decisiones en torno al poder que toma la ciudadanía. Para Colombia significó la derrota de un derecho constitucional: la Paz. Esto obligó al presidente Santos a ajustar el texto de los Acuerdos con los promotores del 'No'. Finalmente, la paz se firmó el 24 de noviembre de 2016; días después fue ratificada por el Congreso, lo que dejó en firme el proceso, pese a la derrota del plebiscito.

No fueron las únicas estrategias de desinformación. Según Carlos Vélez Uribe en esa misma entrevista, habían desarrollado una estrategia por sectores y territorios. Por ejemplo: entre las personas de escasos recursos difundieron mensajes a través de la radio que asociaban los Acuerdos con impunidad por los crímenes cometidos en el conflicto. En ocho municipios del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia del conflicto armado, pasaron propaganda centrada en víctimas. En la región cercana a Venezuela, se enfocaron en transmitir mensajes como: «con los Acuerdos nos vamos a convertir en Venezuela», en referencia a un país socialista y pobre.

La censura y una «bodeguita»

Como si fueran dos caras de una misma moneda, las *fake news* y la estrategia de desinformación del presidente y su grupo político también han permitido destapar verdaderas bombas periodísticas.

En una cuerda que se tensa cuando se habla de *fake news* y censura en Colombia, es muy común que la prensa desmienta la desinformación propagada por entes públicos cuando de cifras se trata como, por ejemplo, en el caso del número de líderes sociales asesinados[7] o en la cantidad de denuncias y llamadas de alerta de mujeres en riesgo por feminicidios.[8] Todos estos datos, también contabilizados por organizaciones civiles, terminan desmentidos y con pruebas.

En Colombia hay varios medios independientes dedicados a verificar el discurso de los políticos y personas poderosas. Hay un ejemplo reciente de esto: ocurrió a finales de 2019, cuando en medio de protestas murió un joven a causa de disparos por parte de la policía, cuyas armas supuestamente solo se utilizan para dispersar a los manifestantes. Es decir, no deberían ser letales. El gobierno intentó explicar el suceso con una versión de los hechos que se convirtió en una *fake news*. Según esta versión oficial, el policía justificó el disparo a la cabeza del joven alegando que éste iba a «poner en peligro» la «integridad [de la policía]» con un «objeto contundente».[9] No obstante, varios medios independientes se tomaron la tarea de recopilar todos los videos ciudadanos, reconstruir los hechos desde diversos ángulos, incluso volver a la escena y demostrar que las afirmaciones del gobierno eran falsas.[10] Es decir, que al joven le habían disparado sin justificación y con ello le habían ocasionado la muerte.

Esta puja por la verdad ha desatado una fuerte contienda por la libertad de prensa y ha revelado a un gobierno con tintes censuradores, al ser descubierto en sus estrategias digitales. El gobierno de Iván Duque se ha hecho famoso por su alta capacidad para censurar medios y periodistas. Tan solo en 2019, se registraron 634 víctimas de censura en Colombia. Si se mide por actos y hechos que se constituyen en violaciones a la libertad de prensa, hablamos de 515, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).[11] El panorama se ha tornado más agresivo en 2020 debido a que recientemente se supo, gracias a una filtración de información a la Revista *Semana*, que hay decenas de periodistas vigilados por el Ejército. De estos periodistas, a los que se les llamó «perfilados», existen folios y carpetas con sus nombres, domicilios, teléfonos, fotografías, entre otros datos. Aunado a esto, el Ejército sacó en twitter en marzo de 2020 una lista de «oposición», en la que incluyó a Cuestión Pública y 32 cuentas de twitter de líderes sociales y políticos.[12] Algo que repudió el país entero.

> Fue como el bautizo de la pérdida de la inocencia electoral. La cachetada del poder de las redes sociales como canal de comunicación de la información que moldea la opinión pública.

Quizá el momento culmen de la reacción a las estrategias de desinformación del gobierno se vivió en las manifestaciónes organizadas en torno al Paro Nacional del 21 de noviembre del 2019, convocadas para protestar, entre otras razones, por la reforma tributaria y el asesinato de varios menores de edad en un bombardeo militar.[13] Para evitar la propagación de las protestas, el gobierno intentó estigmatizar a los marchantes tildándolos de

«vándalos».[14] El Gobierno incluso decretó un toque de queda, mientras que en cadenas de WhatsApp comenzaron a circular advertencias de que entre los manifestantes había «vándalos», es decir, ladrones, que iban a irrumpir en las viviendas. Esto provocó un pánico generalizado en toda Bogotá.

Los periodistas y la sociedad hoy se preguntan: ¿quién fue el responsable de la estrategia de asustar a la gente con los supuestos «vándalos»?, ¿qué fue lo que pasó la noche del toque de queda?, ¿quién dio la orden de armar esos expedientes con información personal?, ¿por qué vigilan a esos periodistas y líderes sociales?.

A principios del 2020, la Liga Contra el Silencio, una red de medios aliados en contra de la censura, reveló que una funcionaria de la presidencia de Iván Duque, Claudia Bustamante, abrió un grupo de WhatsApp por el que convocó a 88 personas, entre ellas a varios influenciadores e influenciadoras, para promover causas afines al expresidente Álvaro Uribe, atacar a medios de comunicación, periodistas y adversarios de manera organizada. Todo esto con la ayuda del entonces Consejero para la Innovación y la Transformación Digital, Víctor Muñoz.[15] A ese nuevo escándalo se le llamó: «la bodeguita uribista». «Bodeguita» porque en Colombia a estos espacios donde se mueven jóvenes que manejan cientos y cientos de cuentas falsas de twitter se les llaman «bodegas».

> ¿Cómo se aplica la censura? A través de bots y cuentas falsas en twitter que se encargan de circular un rumor y marcar tendencias en contra de periodistas.

¿Cómo se aplica la censura? A través de *bots* y cuentas falsas en twitter que se encargan de circular un rumor y marcar tendencias en contra de periodistas. De la misma manera en que ganaron el plebiscito por el 'No': con estrategias de desinformación. Para 2020, la evolución de la estrategia de desinformación ha derivado en Colombia en auténticas «fábricas tecnológicas», dedicadas a influenciar en campañas políticas de diferentes maneras. Estos grupos con capacidad tecnológica y económica, cercanos al gobierno y a los poderosos, saben que las redes sociales son esos otros espacios en los que se puede manipular la verdad de tal manera que parezca un hecho real.

Un contrato firmado en medio del confinamiento por COVID-19 vendría a ser la elipsis final de este artículo: el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) contrató por $3,350 millones de pesos colombianos ($843,000 dólares americanos) a la empresa Du Brand SAS, con el propósito de posicionar al presidente Iván Duque en las redes sociales. Esta empresa fue la que también financió al grupo del 'No' en el plebiscito y fue proveedora de la campaña presidencial de Duque, según el portal Cuentas Claras.[16] El dinero para el contrato salió del Fondo Paz, lo cual resulta, como mínimo, una ironía.

Cuestión Pública: Fundada por tres reporteros de investigación y de periodismo de datos, Cuestión Pública nació en 2018 para llenar el vacío de ofertas del periodismo de investigación independiente en Colombia y poner luz en las sombras de la realidad colombiana: los abusos de poder, las jugadas de las corporaciones bancarias, la ruta de los dineros públicos, los conflictos por la tenencia de la tierra, y el posconflicto colombiano, entre otros temas. Comprometida con la libertad de prensa y la independencia, Cuestión Pública se esfuerza por ser innovadora y practicar el buen periodismo, incluyendo el de datos, para contribuir a que la ciudadanía tome mejores decisiones. Se sostiene principalmente con suscripciones, donaciones y convenios educativos con cooperantes.

www.cuestionpublica.com

1 *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Cartagena,* 12 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

2 Ramírez Prado, Juliana: «El 'No' ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia», asuntos:legales, 4 de octubre de 2016. Disponible en: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-mas-efectiva-de-la-historia-2427891. (Consultado: 7 de mayo de 2020).

3 Ibid.

4 Véase: Redacción Política: «La polarización que atizó el plebiscito», El Espectador, 2 de octubre de 2017. Disponible en:https://www.elespectador.com/colombia2020/politica/la-polarizacion-que-atizo-el-plebiscito-articulo-855836 (Consultado: 7 de mayo de 2020).

5 La expresión 'berraca' es parte del argot colombiano y quiere decir «enojo extremo».

6 La «trashumancia electoral» se refiere a la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside. Constituye un delito según el Código Penal Colombiano.

7 Uprimmy Yepes, Rodrigo: «Cifras mortales», Dejusticia, 4 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/ (Consultado: 7 de mayo de 2020).

8 Redacción: «Sin refugio en tiempos de pandemia», Cuestión Pública, 4 de mayo de 2020. Disponible en: https://cuestionpublica.com/sin-refugio-en-tiempos-de-pandemia/ (Consultado: 7 de mayo de 2020).

9 Redacción Judicial: «La versión del capitán del Esmad que disparó contra Dilan Cruz», El Espectador, 6 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-version-del-capitan-del-esmad-que-disparo-contra-dilan-cruz-articulo-894612 (Consultado: 7 de mayo de 2020).

10 Montes, Jimmy; Cuestión Pública (2019): «Dilan no murió: ¡Lo mataron!», Cuestión Pública. Disponible en: https://cuestionpublica.com/dilan-cruz-no-murio-lo-mataron/ (Consultado: 7 de mayo de 2020).

11 Mapa de violaciones a la libertad de prensa, Fundación para la libertad de prensa. Disponible en: https://flip.org.co/index.php/es/atencion-a-periodistas/mapa-de-agresiones (Consultado: 7 de mayo de 2020).

12 En este hilo de twitter se encuentra la lista de «oposición» del Ejército, en la que se incluyen 33 líderes sociales y políticos: https://twitter.com/cuestion_p/status/1237382254952763392?s=20 (Consultado: 7 de mayo de 2020).

13 Unidad Investigativa: «Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero», El Tiempo, 10 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/asi-fue-el-bombardeo-en-el-que-murieron-8-ninos-en-caqueta-432146 (Consultado: 7 de mayo de 2020).

14 Redacción: «Movilización, desinformación y pánico en Colombia: es la hora de la responsabilidad», DemocraciaAbierta, 28 de noviembre de 2019. Disponible

en: https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/movilizaci%C3%B3n-desinformaci%C3%B3n-y-p%C3%A1nico-en-colombia-es-la-hora-de-la-responsabilidad/ (Consultado: 7 de mayo de 2020).

[15] Liga contra el silencio: «En las entrañas de una 'bodeguita' uribista», Cuestión Pública, 6 de febrero de 2020. Disponible en: https://cuestionpublica.com/entranas-bodeguita-uribista/ (Consultado: 7 de mayo de 2020).

[16] Registraduría Nacional: Portal Cuentas Claras en elecciones, Información reportada, candidato: Iván Duque Márquez. Disponible en: https://www5.registraduria.gov.co/CuentasClarasPublicoPre2018/Consultas/Candidato/Reporte/5 (Consultado: 7 de mayo de 2020).

Combatiendo las mentiras: Verificado, la iniciativa mexicana de chequeo de datos

Entrevista con Daniela Mendoza

Jenny Zapata (JZ): «Mentiras en las redes sociales, mentiras en los medios, mentiras en la voz de quienes nos gobiernan … », alerta el video de presentación de la organización mexicana Verificado. ¿Cómo surge la primera iniciativa periodística especializada en la verificación del discurso público en México para combatir la desinformación?

Daniela Mendoza (DM): Verificado surgió en el contexto de las elecciones presidenciales de 2018 en México, en las que la inminencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador se vio desde el principio. Muchos recordábamos que sus intenciones de ser presidente se habían cruzado con un problema terrible de manipulación de la información en procesos electorales anteriores.[1] La alianza Verificado 2018 unió a más de 60 medios, organizaciones sociales y universidades en México para verificar la veracidad de la información que circulaba en torno al proceso electoral.

Verificado 2018 se situó como el único actor no político dentro de la elección, porque las ciudadanas y los ciudadanos no confían del todo en los órganos electorales y los sitúan del mismo lado que los partidos políticos. Eso fue muy importante, pues dimensionó y abrió el tema de la desinformación y las *fake news,* y lo colocó en las conversaciones de las personas.

JZ: En 2019, una vez electo López Obrador, ustedes iniciaron con la verificación de «La Mañanera», conferencia de prensa diaria, donde el presidente ofrece información sobre las acciones de la administración federal y responde a preguntas de la prensa. «La Mañanera» ha resultado determinante para la agenda política y el debate público entre opinólogos y ciudadanos desde su primera edición. ¿Por qué consideras que este ejercicio representa un hito en la proyección de Verificado?

DM: Al principio, la verificación de «La Mañanera» la hicimos solamente como un ejercicio pero, poco a poco, se convirtió en nuestro sello. Durante esta conferencia, el presidente sale a hablar con la prensa, y luego salimos nosotros y decimos que sí sale todos los días a hablar con la prensa, pero el 60 por ciento de lo que dice no es verdad.

El *fact-checking* es uno de los métodos de investigación periodística más colaborativos que existen y uno de los más generosos. Tanto así que las bases de datos de la información que se recaba se comparten, porque aquí no hay competencia: tenemos un objetivo bien específico que es combatir la desinformación, aclarar dudas y despejar toda nota tendenciosa de la mediósfera, para que las personas no caigan en ese tipo de información.

Si bien algunos de los mejores ejercicios han sido en épocas electorales, con el COVID-19 nos dimos cuenta de que no hay que dejar de verificar nunca. No es un tema de coyuntura, siempre puede surgir algo.

Daniela Mendoza, México, es periodista, especializada en el análisis del discurso y la verificación de datos. Cofundadora y Directora General de Verificado, una iniciativa independiente de chequeo de datos. Docente universitaria y columnista.

Jenny Zapata López es Coordinadora de Comunicación de la Oficina Ciudad de México de la Fundación Heinrich Böll.

JZ: ¿Cómo se ha ido construyendo la desinformación?

DM: Hay varios factores que subyacen a este fenómeno. Yo les llamo las «4D»: desacreditar, difamar, deslegitimar y distraer. Estas funciones que tiene la desinformación pueden ser utilizadas por cualquiera. No podemos decir que existe un gran aparato desinformador que quiere desestabilizar la información en el país y el mundo, sino que cada ente —partido, movimiento político, social, religioso, grupo de vecinos— en un momento determinado puede producir desinformación, deliberadamente o sin darse cuenta. Y la desinformación apela a eso: a deslegitimar una causa o una persona, a desacreditar a alguien, a distraer la atención.

La desinformación siempre ha existido, pero la diferencia ahora es que existen más canales de difusión: los medios de comunicación, todas las redes sociales, los equipos de comunicación social de los gobiernos, las redes sociales de los políticos que deciden informar directamente a las ciudadanas y ciudadanos.

También hay mucho periodismo ciudadano,[2] que en algunos casos no tiene el rigor del periodismo profesional, y sin querer también puede producir o reproducir desinformación. En este sentido creo que estamos ante un escenario distinto, porque los canales que producen el mensaje son más, y porque consumimos mucha información.

JZ: ¿Cuál ha sido la coyuntura política que llevó a que se intensificara la desinformación en los últimos años?

DM: Creo que el incremento en la desinformación se debe a que hay una polarización en la carga política del país. Por un lado, el partido mayoritario, su presidente y el Congreso. Por el otro lado, una oposición que no está acostumbrada a ser oposición, que, además, está sumamente pulverizada y en una guerra de tipo ideológico con la presidencia actual y con el partido en el poder.

La actual oposición fue gobierno por mucho tiempo, y mantiene aún muchos nichos en los medios masivos de comunicación. Tiene muchas personas cercanas —comunicadores, articulistas, editorialistas— que les ayudan a apuntalar sus consignas contra el actual régimen con base en información que, si bien es cierta, no está correctamente empleada, por lo que existe una manipulación importante. Los grupos opositores —hablemos del PRI y el PAN— también tienen acceso a datos reales porque fueron gobierno muy recientemente, los cuales muchas veces manipulan para producir comparaciones maliciosas o tendenciosas.

Por otro lado, el actual régimen no ha establecido un diálogo abierto con los medios de comunicación. Al contrario, existe un ataque frontal hacia los medios, a los que el presidente llama «ultraconservadores» o «de oposición». Se desprestigian constantemente el trabajo de la prensa y sus políticas de comunicación por medio de «La Mañanera». Tenemos un presidente que todos los días habla dos horas con la prensa, pero que, gracias a eso, está buscando posicionar su agenda comunicacional como él quiere: nada más dice lo que desea sobre eso de lo que quiere hablar. Creo que eso ha avivado mucho la manipulación, la distorsión, la deslegitimación de algunos grupos hacia el actual régimen, muchos de los cuales no operan con los medios, sino con redes sociales. A todos estos ataques, la presidencia responde con sus propios datos, que tampoco son del todo correctos.

JZ: En un país como México, donde es peligroso ser periodista, ¿sienten que enfrentan algún riesgo por ser parte de Verificado?

DM: Los riesgos que enfrentamos son más a un nivel de riesgo cibernético. A cada rato nos quieren tumbar la página. Nos cuestionan mucho

que quiénes somos nosotras para verificar, que quién nos dio el poder para hacerlo, que quién verifica al verificador... No trabajamos de un modo político, y creo que no hemos llegado a molestar a nadie lo suficiente como para poner en riesgo nuestra integridad física, pero nuestros espacios cibernéticos —nuestra página y nuestras redes sociales personales— sí se han visto muy atacados.

JZ: ¿Crees que hace falta legislar para prevenir la desinformación?

DM: Tengo mis reservas. Creo que este es un tema de educación y no un tema punitivo. Puede ser tan ligera la línea de lo que se puede considerar desinformación, que podría ser una mordaza tremenda e innecesaria.

JZ: ¿Es diferente la crisis por COVID-19 de otros momentos en los que han verificado?

DM: Lo es, justamente por la cantidad de información: la producción de información es increíble porque se trata de un fenómeno global. La misma noticia falsa primero se dio en Italia, después la leímos en Ecuador y después llegó a México. Entonces, la desinformación se hace global. Enfrentamos una enfermedad que está sacudiendo al mundo, que se junta al mismo tiempo con un fenómeno que la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido como «infodemia». Entonces sí es un parteaguas en el tema de desinformación, que a la larga lo que va a dejar es —espero— una audiencia más crítica.

Para el tema del COVID-19 establecimos una alianza con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y con Científicas Mexicanas para verificar información científica. Es muy importante poder trabajar con los periodistas de ciencia, que son pocos en nuestro país. Ellos son los expertos, saben que los procesos científicos no son totales, ni son de un día para otro. Saben cómo manejar los temas, cómo consultar los artículos científicos, cómo no malinterpretar la información... Ellos llevan la batuta y nosotras ofrecemos el método y el trabajo de verificación.

JZ: ¿Crees que se pueda terminar con la desinformación?

DM: Ese sería el deseo de todos, pero tiene que ser una combinación de dos cosas: por un lado, muchos medios de comunicación, en aras de producir mucho material —porque la información es muy demandante— dejaron de lado pasos básicos en el trabajo periodístico como la verificación de datos. La verificación no debería ser como el «cuartito de al lado» del periodismo, sino estar dentro del periodismo, del deber ser. Sin embargo, en los últimos años se perdió... Por la competencia con las redes sociales, por querer sacar el trabajo con inmediatez. Por el otro lado, está la parte que tiene que ver con la ciudadanía, con los consumidores. Los consumidores tienen que ser —y se irán haciendo— mas críticos en la medida que pase el tiempo. Tenemos que considerar dos factores: el nivel de alfabetización mediática de nuestros ciudadanos, y el nivel de acceso a las redes sociales, porque mucha gente en nuestro país tiene acceso a internet y WhatsApp, pero muchas de esas personas no tienen la alfabetización mediática para discernir la información que reciben.

En el sistema educativo se tiene que ver la educación mediática como una materia de necesidad. Estamos hiperconectadas, pero el hecho de que sepamos prender y apagar un aparato no nos hace competentes digitalmente. La escuela debe ser una formadora de la competencia crítica en el manejo de las tecnologías de la información; y después, el periodismo tiene que evolucionar y dejar de querer competir con las redes sociales. Dejar la inmediatez para volver a incorporar procesos de verificación de manera constante y «natural». Por su parte, los políticos tienen que pensar dos veces lo que van a decir, entender que no pueden decir lo que sea y que

Verificado es una iniciativa de chequeo de datos desarrollada por las periodistas mexicanas Deyra Guerrero, Liliana Elósegui y Syndy García, encabezadas por Daniela Mendoza. Nace en la ciudad de Monterrey en 2017, a partir de un encuentro entre Daniela Mendoza y Laura Zommer, fundadora de la iniciativa argentina Chequeado. Verificado forma parte de la red LATAM Chequea, y se encuentra en vías de certificación por la International Fact Checking Network. Entre sus aliados se encuentran medios digitales y periodistas independientes, universidades y redes como SembraMedia. Actualmente colabora en Coronavirus Facts Alliance, una alianza mundial que agrupa a un centenar de medios que publican, comparten y traducen datos en relación con el coronavirus. En el mes de abril de 2020, la página web de Verificado alcanzó un millón de visitas.

https://verificado.com.mx

simplemente la gente lo va a creer solo porque ellos están en una posición de poder. La tarea es de todos: es un trabajo de educación, un trabajo de rigor y un trabajo de profesionalismo.

[1] López Obrador contendió por la presidencia en 2006 y 2012 por el Partido de la Revolución Democrática. En 2018, como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fue electo Presidente de México.

[2] «Periodismo ciudadano» se refiere a la producción y difusión de información por parte de cualquier ciudadano, sin que éste necesariamente cuente con la competencia para hacerlo, insertándose así en un ámbito que compete al periodista profesional. Este fenómeno ha cobrado gran auge por la interactividad que ofrecen las nuevas tecnologías. Véase: Sánchez Guijaldo Mari Paz: «Periodismo ciudadano, ¿un nuevo fenómeno de periodismo?», Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/57161/52058 (Consultado: 15 de junio de 2020).

Método de verificación de Verificado:

1) Revisar los discursos de los actores de la vida pública local, nacional o internacional.

2) Cuando una información se empieza a propagar aceleradamente, es de interés público, puede afectar a alguien, o tiene relevancia por quién la dice, se selecciona para verificar.

3) Tratar de verificar la fuente original.

4) Contrastar lo dicho con hechos y datos, bases de datos gubernamentales, investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, informes especiales realizados por organismos internacionales, estadísticas o entrevistas a especialistas.

5) Colocar lo dicho en un contexto e interpretarlo, porque los datos duros, en frío, no significan mucho si no van acompañados de un contexto, una explicación.

6) Calificar. Determinar si la información es verdadera o es falsa, o si se basa en hechos falsos y verdaderos, en cuyo caso se califica como engañosa.

Tecnologías y COVID-19 en Brasil: entre la desinformación y la vigilancia

Jamila Venturini y Joyce Souza

En vista del avance de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, Brasil declaró el estado de emergencia sanitaria el día 3 de febrero de 2020 y enseguida aprobó una ley que detallaba todas las medidas para hacer frente a la situación.[1] La ley prevé la obligación de compartir datos esenciales para la identificación de personas infectadas entre las organizaciones y las entidades de la administración pública federal, estatal, distrital y municipal. Adicionalmente se decretó el estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020 debido a las secuelas de la pandemia. A pesar de todo, el gobierno federal de Brasil optó por negar la gravedad del peligro, por contravenir las recomendaciones de las autoridades internacionales de la salud y por propagar controvertidas soluciones para la cura del virus.[2] Sumada a una inclinación por la desinformación,[3] esta estrategia ha desembocado en más de cien mil muertos y tres millones de infectados hasta la fecha, lo que ha convertido al país en uno de los más afectados por la pandemia en todo el mundo.[4]

La incapacidad de gestión del gobierno federal durante la crisis sanitaria y su orientación exclusiva hacia una política económica neoliberal son evidentes: después de mucho tiempo sin contar con un ministro de salud, el puesto fue ocupado por el general Eduardo Pazuello, quien se integró a un gobierno cada vez más militarizado.

Vigilancia, desconfianza y desinformación

En Brasil, la respuesta al coronavirus se dejó en manos de las autoridades estatales y municipales, lo que dificultó el acceso transparente y preciso a la información relacionada con la evolución de la pandemia en el país. La falta de diagnósticos confiables, sumada a los sucesivos cambios en la estrategia de comunicación de los datos cuando los casos de infección y mortalidad se encontraban en pleno ascenso en el país agravó la situación.[5] Las divergencias en los datos generaron desconfianza, en especial debido a que el actual gobierno ya había restringido el acceso a información de interés público con anterioridad, lo cual trajo a la memoria las prácticas autoritarias del pasado.[6] Frente a tal confusión, algunos órganos de prensa crearon un consorcio independiente para verificar y recopilar la información divulgada por las autoridades sanitarias de los distintos estados y mantener a la población informada acerca de la evolución de la enfermedad en el país.[7] Aun así se enfrentaron a divergencias en los datos publicados por las autoridades locales. En este contexto, se llegaron a acuerdos entre los gobiernos y las autoridades municipales, así como con empresas de telefonía móvil y de tecnología para controlar los niveles de cumplimiento de la cuarentena en las distintas regiones y localizar a las personas infectadas, siguiendo una tendencia internacional observada durante la actual pandemia, en la que los gobiernos de todo el mundo hacen uso de las tecnologías *big data* para obtener información sobre la población y la difusión de la enfermedad.[8]

Cabe resaltar que el control de la salud pública es una herramienta esencial para poder reaccionar a situaciones de emergencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) «la recopilación, el análisis y la interpretación sistemática y continua de datos relacionados con la salud son necesarios para la planificación, implementación y evaluación de medidas de salud pública» y funcionan como «base de la lucha contra las epidemias». En general, en Brasil puede constatarse un

Jamila Venturini, Brasil,
es periodista formada en la Universidad de São Paulo (USP) y maestra en Ciencias Sociales especializada en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias (FLACSO). Es Coordinadora regional de Derechos Digitales, organización de defensa de los derechos humanos en el contexto digital. Miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad (LAVITS).

Joyce Souza, Brasil,
es periodista, doctora y profesora de Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Federal de e investigadora del Laboratorio de Tecnologías Libres (LabLivre/UFABC). Realiza investigaciones sobre las implicaciones sociales, económicas y políticas de los sistemas algorítmicos y de las relaciones entre comunicación y tecnología, control y privacidad.

trato poco crítico con relación al uso de estas nuevas tecnologías. A diferencia de otros países, cuenta con varias limitaciones técnicas, políticas y estructurales que hacen que el uso de la tecnología para ayudar a combatir el COVID-19 no sea muy eficiente.

Apenas tres cuartos de la población brasileña tiene acceso a internet.[10] A ello hay que añadirle otras restricciones, como el espacio de almacenamiento y/o la antigüedad de los dispositivos usados por una buena parte de los usuarios en el país. Esto significa que las medidas políticas basadas en el análisis de los datos de telefonía móvil o en el uso de una aplicación pueden tener una eficacia muy baja o incluso nula. Las investigaciones internacionales indican que el éxito de las tecnologías para la notificación de personas que hayan podido estar expuestas al coronavirus y la monitorización de síntomas depende de un nivel de uso superior al 60 por ciento de la población y al 80 por ciento de los usuarios de teléfonos inteligentes.[11]

Desde el punto de vista de la privacidad de datos, cabe considerar que existen distintos niveles de familiarización con las tecnologías, principalmente entre los grupos de mayor riesgo o los grupos de población más vulnerables, lo cual determina hasta qué punto se otorga un consentimiento consciente del uso de datos sensibles.

Se suma a ello la ausencia de un marco legal adecuado. A pesar de que en 2018, después de casi una década de debates sobre el tema, se aprobó la Ley General de Protección de Datos (LGPD) en Brasil, su vigencia y amplitud de aplicación son motivos de controversia y resistencia en los ámbitos público y privado.[12] La situación pone en riesgo el derecho a la privacidad garantizado por la Constitución.

El invisible negocio de la vigilancia

En Brasil existen innumerables acuerdos para el intercambio de datos entre el sector privado y el público.[13] Ciudades como Río de Janeiro, Recife y Florianópolis, así como los estados Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, entre otros, adoptaron diferentes modelos de uso de tecnologías en la lucha contra el COVID-19. Las estrategias incluyen el uso de datos de conexión a la red o la geolocalización para identificar patrones de movilidad y concentración de personas, así como el envío de notificaciones y advertencias a personas que potencialmente han estado expuestas al virus. A pesar de que los objetivos y formatos varían, estas iniciativas tienen en común la dependencia del uso de datos personales y la falta de transparencia en relación a la forma en que estos son usados, por quién y bajo qué condiciones. Las cooperaciones incluyen a empresas de telecomunicaciones, empresas emergentes o grandes empresas de tecnología, que en la mayoría de los casos ya cuentan con modelos de negocios basados en la vigilancia por medio del rastreo de personas con fines publicitarios, análisis financiero o seguros públicos y que ahora se convierten en los grandes aliados en la lucha contra el COVID-19.

Uno de los grandes ejemplos de estas prácticas es el de la empresa emergente brasileña InLoco, que firmó un acuerdo con varios estados brasileños. La empresa desarrolló un Mapa brasileño del COVID-19[14] con datos sobre el porcentaje de la población que está respetando la recomendación del aislamiento social. Para ello cuenta con datos de geolocalización recolectados por aplicaciones de empresas del sector financiero y del comercio al por menor. Según la información publicada por la prensa, antes de la pandemia, InLoco reunía una base de datos de 60 millones de dispositivos monitorizados. La empresa afirma proteger la privacidad de los datos e informa que los análisis ofrecidos parten de datos agregados. Sumado a esto, asegura que no recolecta información de identificación personal ni cuentas asociadas, como correo electrónico y números de teléfono. Según la empresa, los datos se almacenan con el consentimiento voluntario de los usuarios que instalan las aplicaciones asociadas. Sin embargo, la empresa no especifica qué aplicaciones tienen instaladas su tecnología ni tampoco el significado que tiene la palabra «voluntariamente», como sucede, por ejemplo, en el uso de aplicaciones bancarias digitales, en las que es necesario aceptar las condiciones de uso de los servicios para poder utilizarlas.

Lo mismo ocurre con otros servicios digitales, algunos de ellos incluso ofrecidos por el Estado, como la ayuda de emergencia ofrecida a los grupos de población más vulnerables durante la pandemia. La dependencia de este tipo de servicios se agrava con la actual crisis sanitaria debido a la necesidad de cumplir con las medidas de aislamiento y pone en entredicho el concepto de un consentimiento libre, especialmente debido a la imposibilidad de aceptar solo parcialmente los modelos de recopilación y uso de datos impuestos por las empresas de forma unilateral. El modelo no es aplicado exclusivamente por InLoco, sino que forma la base del llamado capitalismo de vigilancia,[15] que está presente en nuestra vida

cotidiana y forma parte de nuestras conversaciones y de nuestra interacción con el mundo digital, principalmente durante la pandemia y el aislamiento social. Son formas de vigilancia que no nos dan miedo, a diferencia de los siglos pasados, cuando la vigilancia tenía un «rostro» y a veces incluso un «cargo». La vigilancia actual es casi invisible y nos acompaña disfrazada de entretenimiento y herramienta de trabajo.

Salud y derechos humanos

Si la situación de emergencia sanitaria puede justificar de manera excepcional la recopilación de datos, es necesario que cualquier medida de vigilancia adoptada respete los derechos humanos y los criterios de necesidad, conveniencia y proporcionalidad.[16] Hasta el momento no existe, o se desconoce, una normativa que limite la recopilación de datos a un nivel mínimo necesario para controlar la pandemia y que restrinja su uso para otras finalidades, así como tampoco existe un compromiso explícito de que vayan a destruirse los datos una vez finalizada esta situación de emergencia. En este sentido, existe un desequilibrio entre la garantía de los derechos fundamentales y la falta de transparencia en cuanto al funcionamiento y la implementación de estas medidas. Aparte de las medidas económicas y sociales capaces de garantizar que las personas en una situación vulnerable puedan adoptar medidas para protegerse sin tener que verse atrapados en la dicotomía de «morir de COVID o morir de hambre», es también necesaria, entre otros numerosos esfuerzos, la creación de un comité de comunicación basado en hechos científicos que instruya a los ciudadanos acerca de la gravedad de la situación y que cumpla con los compromisos existentes en términos de acceso a la información y transparencia pública, incluyendo todo lo que se refiere a las cooperaciones establecidas para la vigilancia y el control, así como de qué modo se llevarán a cabo durante y después de la pandemia en relación a todos los datos recopilados.

Los desafíos y las implicaciones políticas y sociales derivadas de estas tecnologías de vigilancia no tienen precedentes, al igual que la propia pandemia. Frank Pasquale ya advirtió en su libro *The Black Box Society*[17] que la calificación de la salud física podría llegar a ser más importante que la calificación crediticia. La urgencia de este tipo de propuestas para encontrar una forma de priorización del tratamiento contra el COVID-19 dentro de un contexto de escasez de equipamientos sanitarios se ha podido constatar ya en algunos estados de los Estados Unidos. De este modo, la tecnología no solo se utiliza como instrumento de control y vigilancia, sino también como auxiliar directa de la necropolítica,[18] es decir, la gestión de quién debe morir y quién vivir. Obviamente, esta decisión no es neutral: las personas con dolencias previas pueden recibir una puntuación menor y no son priorizadas para el tratamiento, lo cual afectaría en particular a grupos tradicionalmente desfavorecidos, como las mujeres y la población negra.

> La vigilancia actual es casi invisible y nos acompaña disfrazada de entretenimiento y herramienta de trabajo.

La pandemia no debe utilizarse bajo ningún concepto como excusa para el intercambio y la comercialización de datos sensibles de la población, ya que esto alberga el riesgo de crear nuevas formas de discriminación y acentuar todavía más las desigualdades, de modo que el país se vea rebasado por ellas. El escenario internacional actual es evidencia de cómo las infinitas bases de datos disponibles para gobiernos y empresas, basadas en nuestra interacción con la tecnología, pueden terminar por determinar si tenemos o no acceso a respiradores en un contexto de anunciada escasez de equipamientos médicos. En el caso de Brasil no hay duda de que este tipo de sistemas terminarían por legitimar la política histórica del genocidio de ciertos grupos de población, que hasta ahora se ha manifestado mediante otras formas.[19]

Traducción del portugués: Gloria Fochs Casas

1 Planalto do Governo Federal: Lei n. 13.979/2020. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm (Consultado: 26 de abril de 2020).

2 Londoño, E., et al: «Bolsonaro, Isolated ...», New York Times, 1 de abril de 2020. Disponible en: https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/americas/brazil-bolsonaro-coronavirus.html (Consultado: 24 de abril de 2020).

3 GaúchaZH: «É falso que cloroquina...», 14 de agosto de 2020. Disponible en: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/08/e-falso-que-cloroquina-teria-salvado-100-mil-vidas-no-brasil-como-diz-bolsonaro-ckdulq9an008801472x6krvnk.html (Consultado: 16 de agosto de 2020).

4 N. de la R.: datos de agosto de 2020. En noviembre de 2020 la cifra de muertos se situaba ya en 162.000 y la de infectados en 5,7 millones.

5 Poco después de que el gobierno federal modificara la forma de comunicación oficial de los datos sobre

la pandemia en Brasil, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apeló a Brasil durante una conferencia de prensa con relación a la necesidad de asegurar la transparencia de la información acerca de la pandemia del nuevo coronavirus en el país. Carta Capital: «OMS pede que o Brasil tenha transparência nos dados sobre a pandemia», 8 de junio de 2020. Disponible en: https://www.cartacapital.com.br/saude/oms-pede-que-o-brasil-tenha-transparencia-nos-dados-sobre-a-pandemia/ (Consultado: 8 de junio de 2020).

6 Painel Folha: «Governo Bolsonaro registra ...», Folha de São Paulo, 5 de julio de 2020. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/07/governo-bolsonaro-registra-o-pior-indice-de-respostas-pela-lei-de-acesso-a-informacao-da-historia.shtml (Consultado: 16 de agosto de 2020).

7 Folha de São Paulo: «Veículos de comunicação...»Folha de São Paulo, 8 de junio de 2020. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-para-dar-transparencia-a-dados-de-COVID-19.shtml (Consultado: 8 de junio de 2020).

8 De acuerdo con una encuesta realizada por el portal OneZero para detectar en qué medida el coronavirus está conduciendo a nuevos programas de vigilancia en el mundo, por lo menos 30 países ya utilizan tecnologías de recopilación de datos con el objetivo de controlar la pandemia. Hasta el momento, los países del continente asiático lideran los esfuerzos de utilización de dispositivos de vigilancia de sus poblaciones y de rastreo de sus contactos. En este contexto llama la atención la rápida e intensa profundización de la cooperación entre la tecnología big data y la big tech. Uno de los principales ejemplos es el de Inglaterra, que cedió los datos del servicio nacional de salud del país a varias corporaciones para el desarrollo de una plataforma de datos compartida con el objetivo de obtener apoyo en las medidas de monitorización. Entre las corporaciones se encuentran Microsoft, Palantir Technologies UK, Amazon Web Services (AWS), Faculty y Google. OneZero: «We Mapped How the Coronavirus...». Disponible en: https://onezero.medium.com/the-pandemic-is-a-trojan-horse-for-surveillance-programs-around-the-world-887fa6f12ec9 (Consultado: 20 de abril de 2020); Gould, M. et al.: «The Power of Data in Pandemic», Blog Department of Health and Social Care, Reino Unido. Disponible en: https://healthtech.blog.gov.uk/2020/03/28/the-power-of-data-in-a-pandemic/ (Consultado: 26 de abril de 2020).

9 Pisa, M.: «COVID-19, Information Problems...», Center for Global Development, 20 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.cgdev.org/blog/COVID-19-information-problems-and-digital-surveillance (Consultado: 20 de marzo de 2020).

10 De acuerdo con los datos de Cetic.br, en Brasil un 74 por ciento de la población brasileña mayor de 10 años cuenta con algún tipo de acceso a internet, mientras que una cuarta parte de la población brasileña sigue sin tener acceso, principalmente entre los habitantes de las zonas rurales y los miembros de las clases con menos ingresos. Cetic.br: «Três em cada quatro brasileiros já utilizam a Internet, aponta pesquisa TIC Domicílios 2019». Disponible en https://cetic.br/pt/noticia/tres-em-cada-quatro-brasileiros-ja-utilizam-a-internet-aponta-pesquisa-tic-domicilios-2019/ (Consultado: 28 de agosto de 2020).

11 Mota, R.: «Covid 19: apps de monitoramento...», Olhar Digital, 17 de abril de 2020. Disponible en: https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/COVID-19-apps-de-monitoramento-exigem-de-adocao-massiva-diz-estudo/99633 (Consultado: 26 de abril de 2020).

12 Lefèvre F., Souza J.: «Brazil delays privacy law, uses COVID-19 for data grab», Heinrich Böll Stiftung Asia Global Dialogue, 8 de julio de 2020. Disponible en: http://boell-hk.palasthotel.de/en/2020/07/08/brazil-delays-privacy-law-uses-COVID-19-data-grab (Consultado: 8 de julio de 2020).

13 Souza J., Venturini, J.: «Tecnologias e COVID-19...», 16 de agosto de 2020, Heinrich Böll Stiftung Brasil. Disponible en: https://br.boell.org/pt-br/2020/06/04/tecnologias-e-COVID-19-no-brasil-vigilancia-e-desigualdade-social-na-periferia-do (Consultado: 16 de agosto de 2020.)

14 Inloco (2020): Mapa brasileiro da COVID-19. Disponible en: https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/ (Consultado: 15 de agosto de 2020.)

15 En el capitalismo de vigilancia, la magnitud del volumen de datos conforma un componente fundamental en una nueva lógica de acumulación, profundamente intencional, que busca predecir y modificar el comportamiento humano como un medio de producir ingresos y controlar el mercado. Zuboff, S. (2015): «Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization». Journal of Information Technology, London, pág. 75–89. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=2594754 (Consultado: 10 de febrero de 2020).

16 UN Experts: «COVID-19: States should not ...», United Nations Human Rights – Office of the High Commissioner. Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E (Consultado: 2 de mayo de 2020).

17 Pasquale, Frank (2015): *The Black Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information,* Harvard University Press, Cambridge, MA.

18 Mbembe, A. (2016): Necropolitics, Duke University Press.

19 Phillips, D.: «Indict Jair Bolsonaro...», The Guardian, 28 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/jair-bolsonaro-international-criminal-court-indigenous-rights; da Silva, C.:»Precisamos reagir ao genocídio...», The Intercept Brasil, 30 de noviembre de 2019. Disponible en: https://theintercept.com/2019/11/30/genocidio-populacao-negra-dor-familias/?comments=1 (Consultado: 2 de mayo de 2020).

Perspectivas América Latina en su versión en alemán está disponible como PDF en nuestro sitio de Internet, donde también es posible suscribirse para recibir periódicamente el ejemplar impreso en alemán:
www.boell.de/de/perspectivas-lateinamerika

Versión en español:
www.boell.de/de/perspectivas-lateinamerika

Fundación Heinrich Böll
Jefa de División América Latina
Ingrid Spiller
Schumannstraße 8
10117 Berlin
Alemania

T 0049 (0)30 28 53 40
W www.boell.de/lateinamerika

Oficina Santiago de Chile
Gitte Cullmann
(a partir del 01.12.2020)
Avenida Francisco Bilbao 882
Providencia
Santiago de Chile
Chile

T 0056 2 25 84 01 72
E info@cl.boell.org
W www.cl.boell.org

Oficina San Salvador
Ingrid Wehr
(a partir del 01.12.2020)
Residencial Zanzíbar
Pasaje A-Oriente No. 24
San Salvador
El Salvador

T 00503 22 74 68 12
E sv-info@sv.boell.org
W www.sv.boell.org

Oficina Ciudad de México
Dawid Bartelt
Calle José Alvarado 12
Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc
CP 06760 México D.F.
México

T 0052 55 52 64 15 14
E mx-info@mx.boell.org
W www.mx.boell.org

Oficina Río de Janeiro
Annette von Schönfeld
Rua da Glória 190, ap. 701
2024 1180 Rio de Janeiro-Glória
Brasil

T 0055 21 32 21 99 00
E info@br.boell.org
W www.br.boell.org

Oficina Bogotá
Florian Huber
Calle 37 No. 15-40
Bogotá
Colombia

T 0057 (1) 37 19 111
E co-info@co.boell.org
W www.co.boell.org

Ilustraciones: La Loma

La Loma fue fundada en 2012 por Daniel Desiderio Páez Castillo y Julia Wolf con el interés de investigar y desarrollar estrategias para la visualización de la información. Desde 2016, La Loma colabora con Carolina Padilla Villarraga y se constituyó como un colectivo colombiano-alemán, enfocado en generar información visual y hacer comprensibles las relaciones complejas. De este modo, el colectivo busca hacer una contribución al bienestar común, económico, social, cultural y ecológico.

W: http://laloma.info/es/la-loma

Créditos

Edición	Fundación Heinrich Böll
Fecha de publicación	Noviembre 2020
Concepto	Evelyn Hartig, Ingrid Spiller
Redacción	Evelyn Hartig, Katharina Prott, Valentina Rojas Loa
Colaboración	Jenny Zapata López, Susanne Dittrich
Diseño Gráfico	Grafikladen, Berlín

Las opiniones vertidas en los artículos son las de las autoras y los autores y no necesariamente son compartidas por la Fundación Heinrich Böll.

Todos los artículos se publican bajo licencia CC BY-SA 4.0 de Creative Commons. Texto de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/es/legalcode

Imagen de portada e ilustraciones de las páginas 4, 14, 18, 24 y 28 bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0 de Creative Commons. Texto de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es